



"2025, Año de la Mujer indígena"

Recurso de Revisión: PGRAI2502859

Solicitud de Información: 330024625000200

Sujeto Obligado: Fiscalía General de la República

Ciudad de México, a veinte de octubre de dos mil veinticinco.

VISTO el estado que guarda el expediente relativo al recurso de revisión al rubro citado y de conformidad con lo previsto en los artículos 6°, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracción V, 8, 10, 13, 34, 35 fracciones I, II y XIX, 36, 144, 145, 146, 147, 148, 153 y Décimo Octavo transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción XX y 206 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República; así como del ACUERDO A/OIC/002/2025 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de abril de 2025, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ORGÁNICA. El veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica. La reforma redefinió la organización administrativa y estableció un nuevo esquema de distribución de competencias, con efectos directos en la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la República, particularmente en lo relativo a sus atribuciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.

II.- SOLICITUD. El veinte de enero de dos mil veinticinco, una persona presentó una solicitud de acceso a la información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual requirió a la Fiscalía General de la República en su carácter de sujeto obligado, lo siguiente:

"Me refiero al ANEXO Técnico de los Lineamientos L/001/2022 de operación del Banco Nacional de Datos Forenses (<https://aplicaciones.fgr.org.mx/MotorDeBusqueda/DownloadDocumento?NombreDocumentoPDF=AnexoTecnicoBNDF.pdf>) publicado en mayo de 2023.

1) Dicho Anexo dice que "para el acceso al sistema, será requerido un usuario y una contraseña". Solicito:



a) el número de usuarios con los que cuenta el Banco, desglosados por a) institución de adscripción; y por b) niveles de acceso (administrador, consulta total, consulta focalizada son los que están previstos en el anexo para ingresar con credenciales, especificar si es que hay algún otro).

2) Dicho Anexo dice que habrá un apartado para consulta pública estadística.

a) Solicito se me informe en qué dirección web es posible realizar dicha consulta. En caso de que no haya una, solicito se me informe el grado de implementación de esta funcionalidad y el plazo previsto para su liberación.

3) Dicho Anexo dice que las personas usuarias deben completar un curso de capacitación. También menciona que podrán brindarse capacitaciones a través de videos que para tales efectos se produzcan.

Solicito:

a) Se me informe en cuántas oportunidades se han impartido esos cursos de capacitación, a cuántas personas y de qué instituciones.

b) el número de videos que han sido producidos; y

c) los videos.

4) Dicho anexo menciona que para el otorgamiento de acceso deben formularse solicitudes que incluyan "cartas responsivas de confidencialidad".

Solicito:

a) el modelo o formato de carta responsiva de confidencialidad.

5) Dicho anexo menciona "planes individualizados de Integración" por Fiscalía/Procuraduría, a los que define como "documento por el que cada una de las fiscalías/procuradurías y demás autoridades competentes emitirá el diagnóstico de disponibilidad de variables de información...".

Solicito

a) el número de "planes individualizados de integración" que han sido elaborados;

b) las instituciones que los han elaborado,

c) los planes.

6) En 4.3.1, el anexo habla de un "cronograma de implementación". Solicito se me

7) El Anexo habla de "Enlaces". Solicito una lista de las instituciones que han designado enlaces.

8) El Anexo habla de "carga masiva de información". Solicito el número de ocasiones en que se ha efectuado una carga masiva de información.

9) El Anexo indica que para confronta a través de características individualizantes y demás atributos, se diseñarán e implementarán algoritmos ponderando el peso de las características coincidentes...

Solicito:

a) el número de estos algoritmos que ha sido diseñado;

b) el número de estos algoritmos que ha sido implementado;

c) los algoritmos.

10) El Anexo indica que las acciones realizadas por los usuarios derivadas de procesos de consulta se preservarán en la bitácora de auditoría.

Solicito:

a) el número de acciones de consulta.

11) El Anexo define a los recursos de información como "fuentes de información almacenadas en medios digitales, las cuales cuenten con las características



necesarias para su explotación a través de herramientas informáticas del BDNF". Solicito:

a) el número de recursos informáticos actualmente interconectados con el Banco, desagregados por institución que lo detenta de forma primaria.

12) Solicito el número de personas fallecidas identificadas a partir de hipótesis generadas por el Banco.

Solicito, por último, que, en lo que respecta a la temporalidad, todas mis preguntas sean interpretadas en el sentido de aplicar desde el día en se publicó el anexo, hasta la recepción de esta solicitud de información.

Muchas Gracias" (Sic)

III.- PRÓRROGA. El dieciocho de febrero del dos mil veinticinco, el sujeto obligado emitió el oficio FGR/UETAG/000833/2025, mediante el cual hizo del conocimiento del solicitante la ampliación del término para dar respuesta a su solicitud.

IV.- DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN. El cuatro de marzo de dos mil veinticinco, mediante oficio FGR/UETAG/001110/2025, el sujeto obligado puso a disposición la respuesta a la solicitud de acceso a la información, en los siguientes términos:

"Con fundamento en lo establecido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2, 61, 121, 134 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11°, fracción XV de la Ley de la Fiscalía General de la República; 5°, fracción I, inciso b, subinciso ii y 20° del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República; en relación con su solicitud de acceso a la información, se hace de su conocimiento que la respuesta correspondiente se encuentra a su disposición, motivo por el cual se le solicita informe a esta unidad, a través del correo electrónico leydetransparencia@fgr.org.mx, la modalidad en la que requiere su entrega, esto es mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos." (Sic)

V.- RESPUESTA. El seis de marzo de dos mil veinticinco, mediante oficio FGR/UETAG/001157/2025, el sujeto obligado dio respuesta a la persona solicitante en los siguientes términos:

*"Con fundamento en lo establecido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2, 61, 121, 134 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11°, fracción XV de la Ley de la Fiscalía General de la República; 5°, fracción I, inciso b, subinciso ii y 20° del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República; en relación con su **solicitud de acceso a la información**, la cual dirigió específicamente a la **Fiscalía General de la República**, consistente en:*



"Me refiero al ANEXO Técnico de los Lineamientos L/001/2022 de operación del Banco Nacional de Datos Forenses (<https://aplicaciones.fgr.org.mx/MotorDeBusqueda/DownloadDocumento?NombreDocumentoPDF=AnexoTecnicoBNDF.pdf>) publicado en mayo de 2023.

1) Dicho Anexo dice que "para el acceso al sistema, será requerido un usuario y una contraseña". Solicito:

a) el número de usuarios con los que cuenta el Banco, desglosados por a) institución de adscripción; y por b) niveles de acceso (administrador, consulta total, consulta focalizada son los que están previstos en el anexo para ingresar con credenciales, especificar si es que hay algún otro).

2) Dicho Anexo dice que habrá un apartado para consulta pública estadística.

a) Solicito se me informe en qué dirección web es posible realizar dicha consulta. En caso de que no haya una, solicito se me informe el grado de implementación de esta funcionalidad y el plazo previsto para su liberación.

3) Dicho Anexo dice que las personas usuarias deben completar un curso de capacitación. También menciona que podrán brindarse capacitaciones a través de videos que para tales efectos se produzcan.

Solicito:

a) Se me informe en cuántas oportunidades se han impartido esos cursos de capacitación, a cuántas personas y de qué instituciones.

b) el número de videos que han sido producidos; y

c) los videos.

4) Dicho anexo menciona que para el otorgamiento de acceso deben formularse solicitudes que incluyan "cartas responsivas de confidencialidad".

Solicito:

a) el modelo o formato de carta responsiva de confidencialidad.

5) Dicho anexo menciona "planes individualizados de Integración" por Fiscalía/Procuraduría, a los que define como "documento por el que cada una de las fiscalías/procuradurías y demás autoridades competentes emitirá el diagnóstico de disponibilidad de variables de información...".

Solicito

a) el número de "planes individualizados de integración" que han sido elaborados;

b) las instituciones que los han elaborado.

c) los planes.

6) En 4.3.1, el anexo habla de un "cronograma de implementación". Solicito se me

7) El Anexo habla de "Enlaces". Solicito una lista de las instituciones que han designado enlaces.

8) El Anexo habla de "carga masiva de información". Solicito el número de ocasiones en que se ha efectuado una carga masiva de información.

9) El Anexo indica que para confronta a través de características individualizantes y demás atributos, se diseñarán e implementarán algoritmos ponderando el peso de las características coincidentes...

Solicito:



- a) el número de estos algoritmos que ha sido diseñado;
b) el número de estos algoritmos que ha sido implementado;
c) los algoritmos.
- 10) El Anexo indica que las acciones realizadas por los usuarios derivadas de procesos de consulta se preservarán en la bitácora de auditoría.
Solicito:
a) el número de acciones de consulta.
- 11) El Anexo define a los recursos de información como "fuentes de información almacenadas en medios digitales, las cuales cuenten con las características necesarias para su explotación a través de herramientas informáticas del BNDF". Solicito:
a) el número de recursos informáticos actualmente interconectados con el Banco, desagregados por institución que lo detenta de forma primaria.
- 12) Solicito el número de personas fallecidas identificadas a partir de hipótesis generadas por el Banco.
Solicito, por último, que, en lo que respecta a la temporalidad, todas mis preguntas sean interpretadas en el sentido de aplicar desde el día en se publicó el anexo, hasta el de recepción de esta solicitud de información. Muchas gracias." (Sic)

Al respecto se hace de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su solicitud fue turnada para su atención a la unidad administrativa que pudiera pronunciarse al respecto, la cual, derivado de la búsqueda realizada, atendió su solicitud en los términos siguientes:

Requerimiento "1) Dicho Anexo dice que "para el acceso al sistema, será requerido un usuario y una contraseña".

Solicito: **a) el número de usuarios con los que cuenta el Banco, ..."**

Respuesta.- Se identificaron un total de **109 altas de usuarios**.

"a) institución de adscripción..."

Respuesta.- Las instituciones a las que se encuentran adscritas las altas de usuarios del Banco Nacional de Datos Forenses corresponden a las siguientes:

- Fiscalía General de la República
- Fiscalía General Justicia del Estado de Tabasco
- Fiscalía General de Justicia del Estado de México
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas



- *Fiscalía General del Estado de Durango*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Colima*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California*
- *Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo*

"b) niveles de acceso (administrador, consulta total, consulta focalizada son los que están previstos en el anexo para ingresar con credenciales, especificar si es que hay algún otro)"

Respuesta.- Se identificaron los siguientes niveles de acceso:

- *Consulta total, con 74 accesos.*
- *Consulta focalizada, con 27 accesos.*
- *Perfil de administrador, con 8 accesos.*

Es importante señalar que únicamente se cuentan con los niveles de acceso establecidos en el numeral 3.1.1 del ANEXO Técnico de los Lineamientos L/001/2022 de operación del Banco Nacional de Datos Forenses.

Requerimiento "2) Dicho Anexo dice que habrá un apartado para consulta pública estadística.

a) Solicito se me informe en qué dirección web es posible realizar dicha consulta. En caso de que no haya una, solicito se me informe el grado de implementación de esta funcionalidad y el plazo previsto para su liberación."

Respuesta.- No se cuenta con registros de lo solicitado. Cabe destacar que a la luz de lo previsto en los Lineamientos L/001/2022, el desarrollo y puesta en funcionamiento de las soluciones tecnológicas del Banco Nacional de Datos Forenses, como lo es el caso de la "Consulta Pública", atiende a un **proceso gradual**, de ahí que su disponibilidad se encuentra supeditada a los trabajos constantes de actualización y ajustes derivados de dicho proceso.

Requerimiento "3) Dicho Anexo dice que las personas usuarias deben completar un curso de capacitación. También menciona que podrán brindarse capacitaciones a través de videos que para tales efectos se produzcan.
Solicito:



a) Se me informe en cuántas oportunidades se han impartido esos cursos de capacitación, a cuántas personas y de qué instituciones.

Respuesta.- Se informa que, los días 20 y 21 de julio de 2023, se dio inició a la impartición del curso de capacitación dirigido al personal encargado de realizar las consultas en el Banco Nacional de Datos Forenses, perteneciente al entonces Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia ahora Centro Federal de Inteligencia Criminal, contando con la participación de las personas asignadas a esa tarea en dicho Centro. Asimismo, en el mes de noviembre de 2024, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos solicitó el registro del curso de capacitación: "Conocimiento, Operación y Uso del Banco Nacional de Datos Forenses" a la Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos de la Fiscalía General de la República, con el fin de que, durante el año 2025, se inicie con su impartición a las personas designadas como usuarias de todo el país.

Los contenidos y programa del curso se elaboraron de manera conjunta entre personal de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos y del Centro Federal de Inteligencia Criminal.

b) el número de videos que han sido producidos; y

Respuesta.- Como parte de los trabajos de arranque del Banco Nacional de Datos Forenses, personal de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, en su momento, **realizó un video tutorial de capacitación** sobre el Banco Nacional de Datos Forenses, en el que se explica el uso del buscador del Banco Nacional de Datos Forenses, mismo que cumple con la función de **herramienta de capacitación**, dados sus contenidos y alcance. Este video se entregó a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el 29 de mayo de 2023, con el objeto de que las Fiscalías y Procuradurías del país, capacitaran a las personas usuarias del buscador del Banco Nacional de Datos Forenses.

Es necesario precisar que **los insumos inherentes a la capacitación para el "Conocimiento, Operación y Uso del Banco Nacional de Datos Forenses" se encuentran en desarrollo** de manera conjunta entre personal de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos y del Centro Federal de Inteligencia Criminal, con el fin de que, durante el año 2025, se inicie con su impartición a las personas designadas como usuarias de todo el país.

c) los videos."

Respuesta.- Se hace de su conocimiento que existe una imposibilidad jurídica para proporcionar lo solicitado, toda vez que se trata de información que actualiza los supuestos de clasificación de reserva, en términos de lo dispuesto en el artículo **110 fracciones I, VII y XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, con relación a los numerales **DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO**



SEXTO y TRIGÉSIMO SEGUNDO de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que señala lo siguiente:

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse** aquella cuya publicación:

I. Comprometa la seguridad nacional, **la seguridad pública** o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no las contravengan; así como las previstas en tratados internacionales."

"Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, **aquella que comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación**, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, **así como para el mantenimiento del orden público**.

Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.

Asimismo, **podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de comunicaciones.**"

"Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:



I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;

II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y

III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal."

"Trigésimo segundo. De conformidad con el artículo 113, fracción XIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el Estado mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo establecido en la Ley General. (...)"

Además de lo establecido en los artículos **119** y **120** de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; **110** de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el numeral **DÉCIMO PRIMERO** de los LINEAMIENTOS L/001/2022 para la implementación y operación del Banco Nacional de Datos Forenses; del Registro Forense Federal; del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas; del Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas; y de la Base Nacional de Información Genética, los cuales en lo medular establecen:

"Artículo 119. El Banco Nacional de Datos Forenses **está a cargo de la Fiscalía y que tiene por objeto concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas,** así como para la investigación de los delitos materia de esta Ley.

El Banco Nacional de Datos Forenses debe estar interconectado con las herramientas de búsqueda e identificación previstas en esta Ley que conforman el **Sistema Nacional** y ser actualizado en tiempo real, mediante personal designado y capacitado para ello. La información deberá ser recabada de conformidad con los protocolos correspondientes."

Artículo 120. **Corresponde a la Fiscalía coordinar la operación y centralizar la información del Banco Nacional de Datos Forenses,** así como administrar el Registro Forense Federal, en términos de lo que establezca el Reglamento. (...) "

"Artículo 110.- (...) "

La información contenida en las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.



Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, (...)

"DÉCIMO PRIMERO. La información contenida en el Banco Nacional de Datos Forenses, así como la información y datos de todos los registros, bases y sistemas a que se refieren los presentes Lineamientos, se regirá conforme a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como de protección de datos personales, de conformidad con los artículos 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 97 de la Ley de la Fiscalía General de la República, y 116 y 127 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas."

Así como de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 218, el cual a letra señala:

"Artículo 218. Reserva de los actos de investigación

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad



con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme."

Tomando como base el fundamento jurídico anterior, en virtud de que lo solicitado describe los procesos a través de los cuales es posible acceder al Banco Nacional de Datos Forenses, los requerimientos de acceso, el tipo de información que es posible ingresar y extraer considerando la información contenida en los Registros y Sistemas que éste interconecta, y toda vez que la referida interconexión forma parte del Sistema Nacional de Información, así como los Registros Nacionales, cuyos fines son salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado; en ese sentido, se trata de datos que de ser revelados pondrían en riesgo la preservación de la seguridad pública, además de que al relacionarse con información sobre la operación de dicho sistema, en específico sobre cómo efectuar la consulta de datos vertidos en carpetas de investigación tramitadas ante el Ministerio Público, se vulnerarían las líneas de investigación y se pondría en riesgo la persecución de los delitos.

En ese sentido, se proporciona la prueba de daño correspondiente a la fracción I del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

a) Riesgo real, demostrable e identificable: Difundir la información relacionada con el video de capacitación constituye un riesgo o una amenaza a la seguridad pública, ya que al revelarse facilitaría que organizaciones criminales o personas con fines delictivos identifiquen posibles vulnerabilidades con el objetivo de ejecutar ataques remotos, accesos no autorizados, robo o uso indebido de la herramienta y con ello, eludir las diversas acciones tácticas y estratégicas encaminadas a afianzar la seguridad pública en su vertiente de procuración de justicia en el territorio nacional.

Por ello, reservar la información permite robustecer las tareas encaminadas a la seguridad pública ejecutadas por esta Fiscalía General de la República, en particular aquellas orientadas a realizar reportes estratégicos sobre criminalidad nacional, transnacional o internacional a efecto de identificar patrones, estructuras, organizaciones, modos de operación, así como cualquier otra información, los cuales son utilizados en el análisis de la información recopilada por esta Institución para la investigación y persecución de los delitos del orden federal.

b) Perjuicio que supera el interés público: El divulgar especificaciones técnicas contenidas dentro del video de capacitación supone un perjuicio que supera el interés público general, pues su difusión permitiría que organizaciones criminales o personas con fines delictivos pudieran conocer las tácticas, tecnologías, planes, estrategias, información y/o sistemas de comunicaciones utilizadas para realizar el



análisis de información estratégica y sus correspondientes productos de inteligencia, situación que vulnera la capacidad de reacción de la Institución para atender las investigaciones que lleva a cabo esta Fiscalía para fortalecer la seguridad pública del país.

*Asimismo, toda vez que la información de la operatividad del Banco Nacional de Datos Forenses es empleada por el personal adscrito a esta Fiscalía General de la República, así como por personal de las demás Instituciones incorporadas al Sistema Nacional de Información, **constituyen fuentes de inteligencia y métodos de recolección de información orientados a sugerir líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos y la probable autoría o participación de las personas**, lo que también podría revelar datos sensibles pertenecientes a los diversos usuarios de dicho sistema e incidir en la atención de las investigaciones y combate a la delincuencia organizada que lleva a cabo esta Fiscalía, por tal motivo, es esencial para los Ministerios Públicos de la Federación, asegurar que las operaciones de inteligencia continúen siendo efectivas con el propósito de salvaguardar la seguridad pública del Estado mexicano.*

c) Principio de proporcionalidad: *La presente clasificación se adecúa al principio de proporcionalidad, toda vez que se justifica reservar su divulgación por el riesgo de vulnerar y poner en peligro la capacidad y margen de operación de este sujeto obligado en **materia de seguridad pública**, ya que obstaculizaría las funciones del Ministerio Público de la Federación; es decir, la investigación y persecución de delitos federales.*

Atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información referente al uso y la consulta de información dentro del Banco Nacional de Datos Forenses, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, porque si bien la información en posesión de todos los sujetos obligados es pública, lo cierto es que también el derecho de acceso a la información se encuentra acotado por razones previstas en la normativa en la materia, que en el caso que nos ocupa se justifica al existir un riesgo de daño sustancial a las tareas de seguridad pública asignadas al Ministerio Público de la Federación. En tal virtud, es de señalarse que el interés público general se coloca por encima de un interés particular, debido a que la naturaleza de la información reservada resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado consistente en llevar a cabo acciones tendientes a garantizar la seguridad pública a lo largo del territorio nacional.

*Robustece lo anterior, lo contenido en las disposiciones señaladas en los artículos 2, 3, 5 fracción II, IX y XVII de la **Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública**; en correspondencia con el artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 210 de su Reglamento;*

"Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

...



II. Bases de Datos: Las bases de datos que constituyen subconjuntos sistematizados de la información contenida en Registros Nacionales, archivos digitales o bancos de datos en materias relativas a detenciones, armamento, equipo y personal de seguridad pública, medidas u órdenes de protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, así como las bases de datos del Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno relativas a la información criminalística, huellas dactilares de personas sujetas a un proceso o investigación penal, teléfonos celulares, personas sentenciadas y servicios de seguridad privada, así como las demás necesarias para la prevención, investigación y persecución de los delitos. El conjunto de bases de datos conformará el Sistema Nacional de Información;

IX. Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones de la Federación y entidades federativas que integran al Ministerio Público, los servicios periciales, policías de investigación y demás auxiliares de aquel;

XVII. Sistema Nacional de Información: al Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, el cual constituye el conjunto integrado, organizado y sistematizado de las Bases de Datos. Está integrado por elementos metodológicos y procedimentales que permiten a las Instituciones de Seguridad Pública su consulta e interconexión para el desempeño de sus funciones".

De lo anterior, se colige que conforme a lo establecido en los numerales invocados de la Ley en cita, la Fiscalía General de la República, en su carácter de ente procurador de justicia, es responsable de la administración, protección, clasificación y desclasificación y acceso de la información que genere o custodie, cuya aplicación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipos útiles para la generación de inteligencia para la seguridad pública, como es en el caso que nos ocupa, sin importar la naturaleza, propósito u origen de los documentos que la consignent, en los términos de esta Ley, así como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ahora bien, resulta de vital importancia señalar que si bien la Fiscalía General de la República está obligada a observar las disposiciones generales y federales en materia de reserva de la información contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, también lo es que esta obligación no la exime de observar o dar cumplimiento a las disposiciones específicas que le marcan las leyes en materia de Seguridad Pública, las cuales imponen la reserva estricta de toda información que obra dentro de un sistema de interconexión institucional como lo es el Banco Nacional de Datos Forenses, independientemente de su contenido, naturaleza o fin.



Como se puede observar en el caso que nos ocupa, la clasificación de estricta reserva de la información solicitada no obedece a un criterio arbitrario, sino que opera la reserva de la información por Ministerio de Ley, debido a que existen disposiciones legales, tanto generales como específicas, que expresamente mandatan su reserva.

Sobre ese aspecto, se estima que se debe tener en cuenta que aún en aquellos casos en que la información se solicite desagregada, ya sea de forma numérica o estadística, siempre está abierta la posibilidad de que su divulgación pueda comprometer la Seguridad Pública. De ahí que es necesario que en cada caso se analice no sólo el tipo de información, sino el impacto que su divulgación podría ocasionar.

En ese orden de ideas, tratándose de información potencialmente afectada por una reserva, especialmente cuando ésta verse sobre un tema vinculado a la Seguridad Pública, que no sólo se descarte que no se trate de un tipo de información reservada en términos de la normativa antes invocada, es imprescindible establecer la posibilidad de que aún fragmentada, ésta pueda obtenerse a través de diversos medios, incluyendo fuentes abiertas de información, relacionada a la interconexión institucional en donde se pueden obtener datos sensibles que, en conjunto permitirían vulnerar la Seguridad Pública, al tratarse de información sobre la operación de dicho sistema y, en específico sobre cómo efectuar la consulta de datos vertidos en carpetas de investigación tramitadas ante el Ministerio Público, permitir.

Por otro lado, se proporciona la prueba de daño correspondiente a la fracción VII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Como ya ha sido expuesto, fundado y motivado en párrafos precedentes, corresponde a la Fiscalía General de la República, la investigación y persecución de los delitos, en el entendido lógico que, como resultado de dichas indagatorias, podrá ejercitar sus pretensiones procesales ante autoridad judicial. Es decir, las facultades constitucionales de investigación y persecución de los delitos se entienden a través del personal de la Fiscalía General de la República.

De esa forma, atendiendo a los requisitos por los que se actualiza la reserva, es menester manifestar que, en efecto:

i) La información requerida contiene datos relacionados a la operación y uso de un sistema de interconexión institucional como lo es el Banco Nacional de Datos Forenses, cuyo fin es permitir la consulta de información carácter sensible al tratarse de datos relacionados a víctimas de delito, contenida en indagatorias en trámite, así como en otros repositorios de información.

ii) La difusión de la información que contiene el ya aludido video obstruiría las funciones de investigación del delito, toda vez que se atenta contra el desarrollo de la teoría del caso, lo que trae como consecuencia el debilitamiento de las pretensiones procesales que desarrolla el Ministerio Público a cargo de la investigación.



a) **Riesgo real, demostrable e identificable:** El divulgar el video de capacitación que contiene las especificaciones técnicas relacionadas con el soporte para la operación del Banco Nacional de Datos Forenses, permitiría que grupos delincuenciales identifiquen brechas en la defensa y aprovechen esa información para perpetrar ataques o contar con elementos que permitan eludir las acciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como de la propia Fiscalía General de la República, particularmente aquellas orientadas a formular líneas de investigación así como identificar la probable autoría o participación de las personas en la comisión de un delito, constituyendo así una amenaza a la persecución de delitos especialmente para aquellos previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Al reservar el video de capacitación que contiene la descripción de la operación del Banco Nacional de Datos Forenses, permite obtener una ventaja táctica sobre los grupos y células delincuenciales para identificar patrones, estructuras, organizaciones, modos de operación, entre otros, de ahí que la razón principal que justifica la reserva de la información es mantener la efectividad de estas medidas.

Concatenado con lo expuesto, proporcionar la información de referencia, representa un riesgo real, demostrable e identificable, ya que se vincularía con información elemental utilizada para la realización de las funciones sustantivas que llevan a cabo la Fiscalía General de la República, **a través de la investigación de los delitos para integración de las carpetas de investigación**, información que de ser conocida por grupos criminales sería utilizada para evadir, destruir u ocultar los medios de prueba recopilados para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del o los responsables de la comisión de un ilícito, obstruyendo así la investigación y persecución de los delitos que son competencia de esta Fiscalía General de la República.

b) **Perjuicio que supera el interés público:** La divulgación de la información requerida por el particular, podría exponer las fuentes de inteligencia o métodos de recolección de información, situación que podría poner en peligro las labores de esta Fiscalía General de la República, ya que si terceras personas con fines delictivos conocen la forma de operar del Banco Nacional de Datos Forenses, así como los métodos utilizados para la sistematización y análisis de la información, pueden encontrar o diseñar mecanismos de evadir acciones tendientes a entorpecer el intercambio de la información contenida en el sistema de consulta interinstitucional y con ello las líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos y la probable autoría o participación de personas en la comisión de un delito.



Bajo esa línea argumentativa, hacer de conocimiento público el video de referencia, superaría el interés público general considerando que las funciones principales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de esta Fiscalía General de la República, son la prevención especial y general de los delitos, así como la investigación y la persecución de estos; tal situación, constituiría un riesgo en perjuicio a la seguridad general, toda vez que de conocer la información acerca de la operación del BNDF, la delincuencia organizada la utilizaría en beneficio de su capacidad de respuesta ante el esclarecimiento y persecución de los delitos, especialmente para el caso en particular que hoy nos ocupa, de aquellos previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

*c) **Principio de proporcionalidad:** Se desprende que el reservar información acerca de la operación un sistema de interconexión, como lo es el Banco Nacional de Datos Forenses, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, porque si bien la información en posesión de todos los sujetos obligados es pública, lo cierto es que también el derecho de acceso a la información se encuentra acotado por razones previstas en la normativa en la materia, que en el caso que nos ocupa se justifica al existir un riesgo de daño sustancial a la prevención y persecución de los delitos.*

Como se puede observar, en el caso que nos ocupa, la clasificación de estricta reserva de la información solicitada no obedece a un criterio arbitrario, sino que opera la reserva de la información por Ministerio de Ley, debido a que existen disposiciones legales, tanto generales como específicas, ya señaladas en el cuerpo de la presente respuesta, como lo es lo dispuesto por el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que expresamente mandatan su reserva.

Finalmente, se ofrece la prueba de daño correspondiente a la fracción XIII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

*a) **Riesgo real, demostrable e identificable.** Entregar información relacionada con la operatividad, capacitación, implementación, incorporación y consulta de registros que obran dentro de un sistema de interconexión institucional como lo es el Banco Nacional de Datos Forenses, pone en riesgo los fines previamente aludidos, constitucionalmente válidos y de interés general de: salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado.*

Publicar la información requerida en los videos de capacitación a personas que no forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, facilitaría la



vulneración del sistema de interconexión institucional, al dar elementos sobre su operatividad incluyendo la consulta de información relacionada con investigaciones en trámite.

Adicionalmente, la revelación de la información requerida implicaría cometer el delito previsto en el artículo 225, fracción XXVIII del Código Penal Federal: delitos contra la administración de justicia en su modalidad de dar a conocer a quien no tenga derecho documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que, por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales, tal como lo son los datos contenidos en los sistemas de consulta que interconectan con el BDNF.

b) Perjuicio que supera el interés público. Es pertinente señalar que la reserva de la información por parte de esta Institución, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que la solicitud de comentario atiende a disposiciones expresas de las leyes en las cuales se basó esta Institución al realizar la reserva, que disponen que el acceso limitado al personal facultado y capacitado de esta institución, la cual forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

c) Principio de proporcionalidad. El que la información esté reservada permite que el Banco Nacional de Datos Forenses, cumpla con su fin, apegándose al principio de proporcionalidad, resulta el medio más idóneo para proteger los actos que conllevan alcanzar los fines previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En dichas consideraciones, es de concluirse que la reserva de la información no implica una restricción del derecho de acceso a la información. Dada la naturaleza y propósito de esa información, su reserva es proporcional porque atiende la importancia de la protección del interés jurídico que se tutela, de la correcta administración de justicia y del interés general que hay en que se cumpla el proceso penal en las investigaciones de este tipo de delitos, que permite, entre otras cosas, la reparación del daño y el establecimiento de garantías de no repetición.

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que la Ley de la Fiscalía General de la República, en su artículo 10, establece que para efectos del acceso a la información pública, esta Institución se regirá bajo el principio de máxima publicidad en los términos de la Constitución, no obstante, se clasificará la información cuya divulgación pueda poner en riesgo la seguridad de las personas que intervienen en un procedimiento penal o las investigaciones que realice la persona agente del Ministerio Público de la Federación y mantendrá la confidencialidad de los datos personales, en los términos que disponga el Código Nacional, otras disposiciones aplicables y esa Ley.



Como se puede observar, en el caso que nos ocupa, la clasificación de estricta reserva de la información solicitada no obedece a un criterio arbitrario, sino que opera la reserva de la información por Ministerio de Ley, debido a que existen disposiciones legales, tanto generales como específicas, que expresamente mandatan su reserva.

En ese orden de ideas, tratándose de información potencialmente afectada por una reserva especialmente cuando ésta verse sobre un tema vinculado a la Seguridad Pública, es imprescindible que no sólo se descarte que no se trate de un tipo de información reservada en términos de los artículos mencionados a lo largo del cuerpo de la presente prueba, sino la posibilidad de que aún fragmentada ésta pueda en conjunto ser sensible para la Seguridad Pública.

Finalmente, se informa que el acta de la clasificación antes referida podrá localizarla en el momento que concluya su formalización en:

Octava Sesión Ordinaria 2025

<http://www.fgr.org.mx/en/transparencia/AccesoInformacionPublica>

Requerimiento "4) Dicho anexo menciona que para el otorgamiento de acceso deben formularse solicitudes que incluyan "cartas responsivas de confidencialidad". Solicito:

a) **el modelo o formato de carta responsiva de confidencialidad"**

Respuesta.- Se proporcionan **formatos sugeridos** a las Fiscalías de cada uno de los estados, relativos a Responsiva de Confidencialidad y Datos de la cuenta con promesa de confidencialidad, **mismos que sirven de ejemplo para los enlaces y candidatos a usuarios**, con la finalidad de que no omitan ningún dato personal y/o técnico requerido para la correcta alta y generación de usuario dentro de la plataforma del Banco Nacional de Datos Forenses.

Resulta importante manifestar que dichos formatos se estiman como **documentación de libre llenado**, dejando a criterio de cada enlace y candidato a usuario la posibilidad de su modificación de forma, tipografía y fundamentación aplicable a cada entidad federativa, incluso si se requiriera el uso de papel membretado, siempre y cuando se proporcionen los datos personales y/o técnicos que son solicitados por esta Fiscalía Especial.

Requerimiento "5) Dicho anexo menciona "planes individualizados de Integración" por Fiscalía/Procuraduría...".

Solicito

a) **el número de "planes individualizados de integración" que han sido elaborados;"**

Respuesta.- Se identificó **un Plan Individualizado de Integración al Banco Nacional de Datos Forenses para la interoperabilidad con el Registro Nacional de Detenciones.**



Lo anterior, atiende a que nueve de los recursos de información interconectados con el Banco Nacional de Datos Forenses corresponden al fuero federal, de ahí que al ser Registros administrados por la Fiscalía General de la República no se actualiza la necesidad de un diagnóstico sobre la disponibilidad de variables de información, al contar con una homologación de registros, procesamientos y difusión de la información contenida en estos.

"b) las instituciones que los han elaborado."

Respuesta.- Se identificó que el Plan Individualizado de Integración al Banco Nacional de Datos Forenses para la interoperabilidad con el Registro Nacional de Detenciones fue elaborado por la **Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana**.

"c) los planes."

Respuesta.- Derivado de una búsqueda exhaustiva y razonable de la información, se localizó el Plan Individualizado de Integración al Banco Nacional de Datos Forenses para la interoperabilidad con el Registro Nacional de Detenciones, mismo que se encuentran a su disposición.

Sin embargo, se le comunica que existe un impedimento material y jurídico para atender su petición en la modalidad señalada, toda vez que la modalidad en la que se encuentra dentro de los archivos institucionales es de manera física. Por otro lado, para su entrega es necesaria la elaboración de una versión pública, ya que contiene datos que actualizan los supuestos de clasificación de reserva que se cita más adelante, por tanto, ésta podrá ser elaborada previo pago de envío correspondiente, en su caso.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 108 y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, y al **Criterio 08/17** del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a la letra indican:

"Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 108. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.



Artículo 136. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. **Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.**

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas

Quincuagésimo sexto. Cuando la elaboración de la versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, genere costos por reproducción por derivar de una solicitud de información o determinación de una autoridad competente, **ésta será elaborada hasta que se haya acreditado el pago correspondiente.**"

En ese contexto, se precisa que las documentales contienen especificaciones técnicas relacionadas con el soporte para la operación del Registro Nacional de Detenciones, además de datos que permiten la identificación de las personas servidoras públicas que tienen conocimiento sobre dichas especificaciones derivado de su participación en la elaboración del documento en referencia, los cuales revisten el carácter de reservado conforme a lo establecido en el artículo **110 fracciones I, V, VII y XIII** de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que refieren:

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

I. **Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;**

""

V. **Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;**

""

VII. **Obstruya la prevención o persecución de los delitos;**

""

XIII. **Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no las contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.**"

Lo anterior en concatenación con los numerales décimo octavo y vigésimo sexto de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como de la elaboración de versiones públicas.



"Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que comprometa la **seguridad pública**, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.

Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.

*Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, **tecnología**, información, sistemas de comunicaciones.*

"Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre una o varias personas físicas y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud; especificando cuál de estos bienes jurídicos será afectado, así como el potencial daño o riesgo que causaría su difusión.

"Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:

- I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;*
- II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso,*
- III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal...*

"Trigésimo segundo. De conformidad con el artículo 113, fracción XIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que por disposición expresa de una ley le otorgue tal carácter siempre que no se contravengan las bases, principios y disposiciones establecidas en la Ley



General o las previstas en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter y acreditar la afectación que la divulgación de la información traería a los fines por los que se reserva la información." (sic)

Asimismo, se señala que con fundamento en el artículo 101 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el plazo para la reserva de dicha información será por cinco años.

*Derivado de lo anterior y con fundamento en el artículo 111 de la Ley Federal de Transparencia, en relación con el 104 y 114 de la Ley General, es necesario que los sujetos obligados motiven la clasificación de la información mediante las razones o circunstancias especiales para poder acreditar la prueba de daño correspondiente, misma que en todo momento deberá aplicarse al caso concreto, y la cual deberá demostrar que la divulgación objeto de la reserva represente un **riesgo real, demostrable e identificable**, así como el **riesgo de perjuicio** en caso de que dicha información clasificada sea considerada de interés público, además de precisar que la misma se adecua al **principio de proporcionalidad** en razón que su negativa de acceso no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información de los particulares.*

*La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, párrafo noveno, prevé que la **seguridad pública** es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como la contribución a la generación y preservación del orden público y la paz social.*

*De igual manera, la **seguridad pública** conlleva la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la aplicación de sanciones por infracciones administrativas.*

*Con base en lo anterior, se entiende que la **seguridad pública** se refiere a salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como coadyuvar en la generación y preservación del orden público y social; elementos previstos en el artículo 110, fracción I de la Ley Federal que regula la materia.*

Prueba de daño de la fracción I del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública:



I. Riesgo real, demostrable e identificable: Difundir la información relacionada con las especificaciones técnicas relacionadas con el soporte para la operación del Registro Nacional de Detenciones, contenidas en el Plan Individualizado de Integración al Banco Nacional de Datos Forenses para la interoperabilidad con el Registro Nacional de Detenciones constituye un riesgo o una amenaza a la seguridad pública ya que al revelarse facilitaría que organizaciones criminales o personas con fines delictivos identifiquen posibles vulnerabilidades con el objetivo de ejecutar posibles ataques remotos, accesos no autorizados, robo o uso indebido tanto del Registro Nacional de Detenciones como del propio Banco Nacional de Datos Forenses, y con ello, eludir las diversas acciones tácticas y estratégicas encaminadas a afianzar la seguridad pública en su vertiente de procuración de justicia en el territorio nacional.

Por ello, reservar la información permite robustecer las tareas encaminadas a la seguridad pública ejecutadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como de esta Fiscalía General de la República, en particular de aquellas orientadas a la sistematización y análisis de la información relativa al fenómeno de la delincuencia nacional e internacional, así como a las labores para la generación de inteligencia, la cual entre sus objetos contempla la armonización, disposición, análisis e interpretación de los datos contenidos en bases nacionales que sirvan de apoyo para el estudio técnico científico de los actos de investigación, para prestar auxilio a la persecución de los hechos que la ley señala como delitos del orden federal, detectar amenazas delictivas, así como realizar el trazado del perfil de determinados hechos que la ley señala como delitos o personas que participaron en su comisión.

II. Perjuicio que supera el interés público: El divulgar las especificaciones técnicas relacionadas con el soporte para la operación del Registro Nacional de Detenciones, contenidas en el Plan Individualizado de Integración al Banco Nacional de Datos Forenses para la interoperabilidad con el Registro Nacional de Detenciones supone un perjuicio que supera el interés público general, pues su difusión permitiría que organizaciones criminales o personas con fines delictivos pudieran conocer las tácticas y tecnologías utilizadas para la generación de inteligencia, así como para el análisis de información realizado para prestar auxilio a la investigación y persecución de los hechos que la ley señala como delitos, situación que vulnera la capacidad de reacción de las Instituciones para atender las investigaciones que llevan a cabo por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y esta Fiscalía General de la República para fortalecer la seguridad pública del país.

Asimismo, toda vez que, con las especificaciones técnicas relacionadas con el soporte para la operación del Registro Nacional de Detenciones, contenidas en el Plan Individualizado de Integración son empleadas por personal adscrito tanto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como a esta Fiscalía General de la República, constituyen fuentes de inteligencia y métodos de recolección de información orientados a sugerir líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos posiblemente constitutivos de los delitos, especialmente para el caso en



particular que hoy nos ocupa, de aquellos previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la probable autoría o participación de aquellos que los cometieron, aunado a que son fuentes indispensables para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas, lo que también podría actualizar el riesgo de revelar sus nombres e incidir en la atención de las investigaciones y combate a la delincuencia organizada que llevan a cabo la Secretaría y esta Fiscalía, por tal motivo, es esencial para los Ministerios Públicos de la Federación asegurar que las operaciones de inteligencia continúen siendo efectivas con el propósito de salvaguardar la seguridad pública del Estado mexicano.

III. Principio de proporcionalidad: *La presente clasificación se adecúa al principio de proporcionalidad, toda vez que se justifica reservar su divulgación por el riesgo de vulnerar y poner en peligro la capacidad y margen de operación de los sujetos obligados en materia de seguridad pública, como lo son la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de esta Fiscalía General de la República, ya que obstaculizaría las funciones del Ministerio Público de la Federación; es decir, la investigación y persecución de delitos federales.*

Atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información referente a las especificaciones técnicas relacionadas con el soporte para la operación del Registro Nacional de Detenciones, contenidas en el supra citado Plan y que son empleados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y esta Fiscalía General de la República para la generación de inteligencia, así como para el análisis de información realizado para prestar auxilio a la investigación y persecución de los hechos que la ley señala como delitos, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, porque si bien la información en posesión de todos los sujetos obligados es pública, lo cierto es que también el derecho de acceso a la información se encuentra acotado por razones previstas en la normativa en la materia, que en el caso que nos ocupa se justifica al existir un riesgo de daño sustancial a las tareas de seguridad pública asignadas al Ministerio Público de la Federación. En tal virtud, es de señalarse que el interés público general se coloca por encima de un interés particular, debido a que la naturaleza de la información reservada resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado consistente en llevar a cabo acciones tendientes a garantizar la seguridad pública a lo largo del territorio nacional.

Prueba de daño de la fracción V del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

I. Riesgo real, demostrable e identificable: *Es necesario señalar que la divulgación de la información relacionada con el nombre, cargo y firmas representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo a los intereses del gobierno mexicano, ya que su difusión permitiría la identificación y localización de personas que cuentan con el conocimiento de la información referente a las especificaciones*



técnicas relacionadas con el soporte para la operación del Registro Nacional de Detenciones como lo son las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que participaron en la integración del Plan Individualizado de Integración al Banco Nacional de Datos Forenses para la interoperabilidad con el Registro Nacional de Detenciones, propiciando la materialización de graves riesgos para su **vida, seguridad y salud**, así como las de sus familiares, toda vez que los haría susceptibles de posibles represalias o ataques, mediante acciones de violencia física o moral, en razón de su conocimiento técnico sobre el soporte para la operación del Registro Nacional de Detenciones que es utilizado por las instituciones de seguridad pública con fines estadísticos, de inteligencia y para el diseño de políticas criminales.

II. Perjuicio que supera el interés público La divulgación de los datos que permitan identificar a cualquier persona que haya participado o tenga conocimiento sobre la integración del Plan Individualizado de Integración al Banco Nacional de Datos Forenses para la interoperabilidad con el Registro Nacional de Detenciones, como lo son las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las cuales por ende cuentan con nociones técnicas específicas sobre una base de datos de seguridad pública, así como de la interconexión del supracitado Banco Nacional de Datos Forenses, otorgaría elementos que pudieran ser utilizados en su contra, pues los haría identificables. Así, es importante enfatizar que el bien jurídico tutelado por la casual en estudio es la vida, integridad, seguridad y salud de las personas, los cuales, en un Estado Democrático de Derecho, deben prevalecer, ante el derecho de acceso a la información.

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que, al reservar la información relacionada con el nombre, cargo y firmas, por un tiempo determinado, no solo permite salvaguardar las funciones que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el marco de la seguridad pública del país, sino también protege la identificación y localización de las personas servidoras públicas adscritas a esa Secretaría que participaron en la integración del Plan Individualizado de Integración al Banco Nacional de Datos Forenses para la interoperabilidad con el Registro Nacional de Detenciones, para no poner en riesgo su vida, seguridad y salud, así como las de sus familiares.

Así las cosas, resulta sustancial para preservar la vida, seguridad, integridad física y salud de las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Seguridad y Protección interviniendo en la integración del Plan Individualizado de Integración al Banco Nacional de Datos Forenses para la interoperabilidad con el Registro Nacional de Detenciones, en términos de la causal prevista en el artículo **110 fracción V de la Ley de la materia**.

Prueba de daño de la fracción VII artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública:



I. Riesgo real, demostrable e identificable: El divulgar las especificaciones técnicas relacionadas con el soporte para la operación del Registro Nacional de Detenciones, contenidas en el Plan Individualizado de Integración al Banco Nacional de Datos Forenses para la interoperabilidad con el Registro Nacional de Detenciones, permitiría que grupos delincuenciales identifiquen brechas en la defensa y aprovechen esa información para perpetrar ataques o contar con elementos que permitan eludir las acciones tanto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como de la propia Fiscalía General de la República, particularmente aquellas orientadas a formular líneas de investigación así como identificar la probable autoría o participación de las personas en la comisión de un delito, constituyendo así una amenaza a la prevención y persecución de delitos especialmente para el caso en particular que hoy nos ocupa, de aquellos previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ello derivado de que el Registro Nacional de Detenciones es utilizado por las instituciones de seguridad pública con fines estadísticos, de inteligencia y para el diseño de políticas criminales, por lo que revelar los detalles de las especificaciones técnicas del mismo.

Al reservar las especificaciones técnicas relacionadas con el soporte para la operación del Registro Nacional de Detenciones, contenidas en el Plan Individualizado de Integración al Banco Nacional de Datos Forenses para la interoperabilidad con el Registro Nacional de Detenciones, permite obtener una ventaja táctica sobre los grupos y células delincuenciales para identificar patrones, estructuras, organizaciones, modos de operación, entre otros, de ahí que la razón principal que justifica la reserva de la información es mantener la efectividad de estas medidas.

Concatenado con lo expuesto, proporcionar la información de referencia, representa un riesgo real, demostrable e identificable, ya que se vincularía con información elemental utilizada para la realización de las funciones sustantivas que llevan a cabo las Secretaría de Seguridad Ciudadana y la propia Fiscalía General de la República, a través de la investigación de los delitos para integración de las carpetas de investigación, información que de ser conocida por grupos criminales sería utilizada para evadir, destruir u ocultar los medios de prueba recopilados para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del o los responsables de la comisión de un ilícito, obstruyendo así la prevención, investigación y persecución de los delitos que son competencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana así como de la propia Fiscalía General de la República.

II. Perjuicio que supera el interés público: La divulgación de las especificaciones técnicas relacionadas con el soporte para la operación del Registro Nacional de Detenciones, contenidas en el Plan Individualizado de Integración al Banco Nacional de Datos Forenses para la interoperabilidad con el Registro Nacional de Detenciones, podría exponer fuentes de inteligencia o métodos de recolección de información, situación que podría poner en peligro las labores de inteligencia



realizadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de esta Fiscalía General de la República, ya que si terceras personas con fines delictivos conocen las especificaciones técnicas de los métodos utilizados para la sistematización y análisis de la información relativa al fenómeno de la delincuencia nacional e internacional, así como para las labores para de generación de inteligencia, pueden encontrar o diseñar mecanismos de evadir acciones tendientes a entorpecer las líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos y la probable autoría o participación de personas en la comisión de un delito.

Bajo esa línea argumentativa hacer de conocimiento público la información sobre las especificaciones técnicas relacionadas con el soporte para la operación del Registro Nacional de Detenciones, contenidas en el Plan Individualizado de Integración al Banco Nacional de Datos Forenses para la interoperabilidad con el Registro Nacional de Detenciones superaría el interés público general considerando que las funciones principales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana así como de esta Fiscalía General de la República, son entre otras; la prevención especial y general de los delitos, así como la investigación y la persecución de estos; tal situación constituiría un riesgo en perjuicio a la seguridad general; toda vez que de conocer la información, la delincuencia organizada la utilizaría en beneficio de su capacidad de respuesta ante el esclarecimiento y persecución de los delitos, especialmente para el caso en particular que hoy nos ocupa, de aquellos previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

III. Principio de proporcionalidad: Se desprende que el reservar información referente a las especificaciones técnicas relacionadas con el soporte para la operación del Registro Nacional de Detenciones, contenidas en el Plan Individualizado de Integración al Banco Nacional de Datos Forenses para la interoperabilidad con el Registro Nacional de Detenciones, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, porque si bien la información en posesión de todos los sujetos obligados es pública, lo cierto es que también el derecho de acceso a la información se encuentra acotado por razones previstas en la normativa en la materia, que en el caso que nos ocupa se justifica al existir un riesgo de daño sustancial a la prevención y persecución de los delitos.

Prueba de daño de la fracción XIII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

De conformidad con lo establecido en el artículo 110 párrafo cuarto de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información, así como los **Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detenciones**, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas u órdenes de protección para las mujeres, adolescentes, niñas y niños, medidas cautelares.



soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema.

En ese tenor, se remite la prueba de daño, al tenor de lo siguiente:

I. Riesgo real, demostrable e identificable: *Difundir la información relacionada con la capacidad del Registro Nacional de Detenciones, así como el listado de fuentes de información a cargo del Centro Nacional de Información Plataforma México constituye un riesgo o una amenaza a la seguridad pública ya que al revelarse facilitaría que organizaciones criminales o personas con fines delictivos identifiquen posibles vulnerabilidades con el objetivo de ejecutar posibles ataques remotos, accesos no autorizados, robo o uso indebido.*

II. Perjuicio que supera el interés público: *El divulgar la información relacionada con la capacidad del Registro Nacional de Detenciones así como el listado de fuentes de información a cargo de Centro Nacional de Información Plataforma México, supone un perjuicio que supera el interés público general, pues su difusión permitiría que organizaciones criminales o personas con fines delictivos pudieran conocer las tácticas y tecnologías utilizadas para realizar el análisis de información estratégica y sus correspondientes productos de inteligencia, situación que vulnera la capacidad de reacción de la Institución para atender las investigaciones que se ejecutan para fortalecer la seguridad pública del país.*

III. Principio de proporcionalidad: *La presente clasificación se adecúa al principio de proporcionalidad, toda vez que se justifica reservar su divulgación por el riesgo de vulnerar y poner en peligro la capacidad y margen de operación del Centro Nacional de Información Plataforma México en materia de seguridad pública, lo cual no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, porque si bien la información en posesión de todos los sujetos obligados es pública, lo cierto es que también el derecho de acceso a la información no es absoluto, puesto que su ejercicio se encuentra delimitado a causas e intereses relevantes, en ese sentido, debido a que la naturaleza de la información reservada resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado consistente en llevar a cabo acciones tendientes a garantizar la seguridad pública a lo largo del territorio nacional.*

*Sumado a lo anterior, la divulgación de los datos de las personas que cuentan con el conocimiento de la información referente a las especificaciones técnicas relacionadas con el soporte para la operación del Registro Nacional de Detenciones, así como las propias especificaciones técnicas con las que cuenta dicho Registro contenidas en el Plan Individualizado de Integración **pone en riesgo las actividades de colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana**, esto partiendo de que la información del recurso interconectado proviene del Registro Nacional de Detenciones, mismo que es una base de datos en la cual las Instituciones de Seguridad Pública y de procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, ingresan la información de las personas detenidas a nivel nacional por motivo de un hecho probablemente delictivo o de una falta administrativa y que tiene*



como objetivo prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la desaparición forzada, aunado a ello, no debe pasarse por alto que dicho Registro es utilizado con fines estadísticos, de inteligencia y para el diseño de políticas criminales.

En este sentido, es menester apuntar que los fines de la seguridad pública son salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, para lo cual comprende la prevención especial y general de los delitos, así como la investigación y la persecución de estos, de ahí el interés de que todas aquellas acciones de colaboración de las instituciones de seguridad pública para el cumplimiento de estos fines se mantenga bajo un tratamiento controlado.

*En este sentido la Fiscalía General de la República como ente encargado del Banco Nacional de Datos Forenses, debe otorgar certidumbre tanto a la **Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como aquellas autoridades e instituciones que cuenten con bases, registros o sistemas que contengan información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas**, así como para la investigación de hechos delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, de que dichos recursos interconectados cuentan con los estándares adecuados que impiden la divulgación de los elementos técnicos y la infraestructura tecnológica con los que cuentan.*

Lo anterior considerando que la información publicada puede incidir de manera directa en sus tácticas para el combate a la delincuencia y en una adecuada toma de decisiones, siendo menester señalar que, la información que sea de interés o utilidad de una dependencia no necesariamente tendría que serlo para la otra, de ahí que la información revierte un carácter especial, toda vez que no solo una dependencia es dueña de la información generada, lo que pudiera redundar en una afectación al diálogo con las autoridades participantes, en perjuicio de los intereses del Estado mexicano, de la procuración de justicia y de la seguridad nacional y pública.

Sirve de base para ilustrar lo anterior, por analogía, la tesis jurisprudencial I.100.A.78 A (10a.) de la Décima Época, con número de Registro Digital 2018453, emitida por el Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, en materia administrativa, visible en la página 2295, Tomo III, del Libro 60 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con texto y rubro siguientes:

"NOTA DIPLOMÁTICA. DEBE CLASIFICARSE COMO INFORMACIÓN RESERVADA, SI DE LA PRUEBA DE DAÑO EFECTUADA SE ADVIERTE UN RIESGO REAL, DEMOSTRABLE E IDENTIFICABLE DE QUE SU PUBLICIDAD PODRÍA MENOSCABAR LA CONDUCCIÓN DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES. En términos de los artículos 113, fracción II, de la Ley General y 110, fracción II, de la Ley Federal, ambas de Transparencia y Acceso



a la Información Pública, podrá clasificarse como información reservada, aquella cuya publicación pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales. En ese sentido, si de la prueba de daño efectuada en términos del artículo 104 de la ley general citada, se advierte que la publicidad de una nota diplomática implica un riesgo real, demostrable e identificable de menoscabar la conducción de las relaciones internacionales en perjuicio del interés del gobierno mexicano, como puede ser la afectación del diálogo con otro país, en relación con un acuerdo internacional suscrito entre ambos, esa información debe clasificarse como reservada."

Lo que pone de manifiesto que en las actuales condiciones que imperan en el país, hacer del conocimiento público dicha información atentaría directamente en las labores implementadas para el combate a la delincuencia, poniendo en peligro la actividad de inteligencia criminal de las instituciones, en virtud de que los datos generados conllevan de manera intrínseca la capacidad de reacción y de articulación de capacidades con otras autoridades.

Por lo que las acciones tendentes a su preservación deberán atender a un ejercicio de ponderación de derechos, en el que se coloque el interés general por encima de un interés particular, por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

En ese sentido, se advierte factible que al divulgar la información solicitada, se pudiera causar una lesión a los intereses jurídicos tutelados por la debida procuración de justicia, y la seguridad pública pues las organizaciones delictivas, partiendo de los datos proporcionados, les sería posible emprender conductas para evadirse de la acción de la justicia o para generar acciones propicias para el ocultamiento de sus actividades posiblemente constitutivas de delito, al contar con elementos útiles para generar una prospectiva sobre la actuación de las instituciones, lo que por ende los llevaría a conocer las capacidades técnicas y de reacción de las mismas.

Por tanto, se insiste en que dicha información debe clasificarse como reservada, pues su divulgación pone en riesgo la eficacia del mecanismo de colaboración para la interconexión del Registro Nacional de Detenciones con el Banco Nacional de Datos Forenses, así como de las futuras colaboraciones con las diversas autoridades de los distintos órdenes de gobiernos que tengan a su cargo bases, registros o sistemas que contengan información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como para la investigación de los hechos que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas señala como delitos.



Al respecto resulta aplicable por analogía, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época en Materia Administrativa, con número de registro digital 2016243, visible en el Libro 51, Tomo III, página 1439 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente

"INFORMACIÓN RESERVADA. ASÍ DEBEN CLASIFICARSE LAS MEDIDAS IMPUESTAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA, TENDENTES A CORREGIR SUS CONTROLES INTERNOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO. El fenómeno identificado como "lavado de dinero" implica la realización de diversas actividades que permiten procesar las ganancias obtenidas de forma ilícita, de modo que puedan aprovecharse legalmente, siendo el sistema financiero una de las vías empleadas regularmente para tal propósito. Como consecuencia de ello, las entidades que lo integran se encuentran obligadas a establecer medidas y procedimientos internos tendentes a prevenir y, en su caso, detectar operaciones que pudieran relacionarse con esa clase de recursos, a fin de generar no sólo las condiciones necesarias para disuadir el empleo de dicho sistema como un vehículo para legitimar dinero ilícito, sino también constituir un mecanismo idóneo de coadyuvancia para que las autoridades puedan detectar esa clase de operaciones. Por tanto, si se parte de la premisa de que una de las condiciones naturales necesarias para que los controles mencionados sean eficaces es que su conocimiento esté limitado a determinadas personas, es decir, que su acceso se encuentre restringido, es dable colegir que las medidas que para corregirlos imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deben ser igualmente limitadas para que sean también verdaderamente funcionales. Por tanto, dicha información debe clasificarse como reservada, pues su divulgación pone en riesgo su eficacia, aspecto que resulta de mayor trascendencia para la colectividad preservar."

Es importante manifestar que la clasificación de la información invocada, se encuentra ajustada a derecho, ya que de conformidad con el artículo **64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia hoy Centro Federal de Inteligencia Criminal, su información no se encuentra sujeta a la autoridad del Comité de Transparencia de esta Fiscalía General de la República. En este sentido, es conveniente realizar la transcripción del citado precepto legal:

"Artículo 64. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar, designado por el titular u órgano colegiado supremo, según se trate.

"" El Centro Nacional de Inteligencia; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; las Divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal; la Fiscalía correspondiente o la Unidad Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa



Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa."

Así las cosas, se pone a su disposición las documentales localizadas en consulta directa, o bien, si desea la reproducción de estas en copia simple o copia certificada, atendiendo lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley Federal en la materia.

Por lo anterior, se solicita informe a través del correo electrónico leydetransparencia@fgr.org.mx la modalidad en la que desea obtener la información, o en su caso, si requiere recoger los documentos antes señalados en las oficinas de esta Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental cuya dirección se cita al final del presente escrito, o bien, si desea que se realice la entrega mediante correo certificado a su domicilio, para remitir a Usted el formato de pago del respectivo servicio.

Requerimiento "6) En 4.3.1, el anexo habla de un "cronograma de implementación". **Solicito se me"**

Respuesta.- La versión pública del cronograma de implementación, se encuentra contenido en la versión pública del Plan Individualizado de Integración al Banco Nacional de Datos Forenses para la interoperabilidad con el Registro Nacional de Detenciones, que en el punto anterior se entrega.

Requerimiento "7) El Anexo habla de "Enlaces".
Solicito una lista de las instituciones que han designado enlaces"

Respuesta.- Se identificaron a las siguientes Instituciones que han designado enlaces:

- Fiscalía General de la República
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Colima
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas
- Fiscalía General del Estado de Chihuahua
- Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
- Fiscalía General del Estado de Durango
- Fiscalía General del Estado de Guanajuato
- Fiscalía General del Estado de Guerrero
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco



- *Fiscalía General de Justicia del Estado de México*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán*
- *Fiscalía General del Estado de Morelos*
- *Fiscalía General del Estado de Oaxaca*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo*
- *Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora*
- *Fiscalía General Justicia del Estado de Tabasco*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas*
- *Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala*
- *Fiscalía General del Estado de Veracruz*
- *Fiscalía General del Estado de Yucatán*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas*
- *Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.*

Requerimiento "8) El Anexo habla de "carga masiva de información".

Solicito el número de ocasiones en que se ha efectuado una carga masiva de información."

Respuesta.- Se informa que, de la búsqueda realizada en los sistemas, archivos y/o bases de datos se identificó un total de **trece cargas masivas de información** a los Registros Nacionales.

Requerimiento "9) El Anexo indica que para confronta a través de características individualizantes y demás atributos, se diseñarán e implementarán algoritmos ponderando el peso de las características coincidentes... Solicito:

a) el número de estos algoritmos que ha sido diseñado;"

Respuesta.- A la fecha se han diseñado 11 algoritmos.

"b) el número de estos algoritmos que ha sido implementado;"

Respuesta.- A la fecha se han implementado 11 algoritmos.

"c) los algoritmos"

Respuesta.- Se informa que no es procedente proporcionar la información requerida, en virtud de que actualiza el supuesto de información clasificada como reservada de conformidad con lo previsto por el artículo 110, fracciones I y VII, de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a La Información Pública, en virtud de que se podría comprometer la seguridad pública de la Federación y obstaculizar la prevención o persecución de los delitos.



"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

I. **Comprometa** la seguridad nacional, la **seguridad pública** o la defensa nacional **y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;**

VII. **Obstruya la prevención o persecución de los delitos."**

Lo anterior en concatenación con los numerales décimo octavo y vigésimo sexto de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como de la elaboración de versiones públicas.

"Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que comprometa la **seguridad pública**, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.

Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, **tecnología**, información, sistemas de comunicaciones.

Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:

I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;

II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso,



III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal..."

Por lo anteriormente expuesto, en términos del artículo 104 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se proporciona la prueba de daño, que guarda relación con las razones y/o motivos torales para pronunciarse conforme a lo anteriormente expuesto; esto a través de la acreditación de los siguientes elementos:

Prueba de daño del artículo 110, fracción I (seguridad pública):

I. Los artículos 21 y 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2 y 5 de la Ley de la Fiscalía General de la República contemplan por una parte a esta Fiscalía General como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que organiza al Ministerio Público de la Federación como encargado de la persecución e investigación de delitos federales; y por otra parte a la seguridad pública como una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, lo cual comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos.

Además, es importante destacar que la competencia de la Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas se encuentra establecida en los artículos 5 fracción XII inciso e y; 192 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República que establece entre sus facultades la de coordinar que se provean los servicios de telefonía, comunicaciones, informática, internet, centro de datos e infraestructura tecnológica de la institución a las Unidades Administrativas, para el eficiente y eficaz desarrollo de sus funciones sustantivas.

Es por ello, que difundir la información referente a los algoritmos del Banco Nacional de Datos Forenses revelaría datos concernientes a la capacidad de respuesta tecnológica e informática de esta institución, que es utilizada por el personal de la Fiscalía, para la investigación y persecución de los delitos que hacen efectiva la seguridad pública.

Por su naturaleza, el Banco Nacional de Datos Forenses interconecta las siguientes fuentes de información heterogéneas:

- *Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas (RENAPEFA);*
- *Sistema Estratégico de Seguimiento sobre expresiones Delictivas (SINIED);*
- *Sistema Nacional de Información Nominal (SININ);*
- *Base de Datos Ante Mortem y Post Mortem;*
- *Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET);*
- *Alerta Amber;*



- *Registro Forense Federal (REFOFE):*
- *Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas (RENAFO):*
- *Base Nacional de Información Genética (BaNIG):*
- *Registro Nacional de Detenciones (RND)*

Cada una de las unidades tecnológicas responsables de la administración de la fuente de información, ha desarrollado algoritmos a partir de los criterios o parámetros aportados por los usuarios y de las particularidades tanto tecnológicas como de disponibilidad de variables en sus registros. La herramienta de búsqueda del Banco Nacional de Datos Forenses, consta de una interfaz a la que los usuarios ingresan parámetros o criterios que se encuentran agrupados en: nominales, características individualizantes y elementos biométricos.

De acuerdo con las capacidades tecnológicas (infraestructura y arquitectura tecnológica) y de información de la fuente (variables aprovechables con las que se cuenta para llevar a cabo la búsqueda de registros coincidentes) se diseñan e implementan los algoritmos idóneos de acuerdo con las condiciones particulares.

Los algoritmos guían la forma en que se procesa y gestiona la información, un algoritmo es un conjunto de instrucciones sistemáticas y previamente definidas que se utilizan para realizar una determinada tarea, es por ello que, la divulgación de detalles sobre la implementación de algoritmos de búsqueda de personas del Banco Nacional de Datos Forenses puede revelar características e incluso vulnerabilidades en la seguridad de los sistemas, lo que podría ser aprovechado por atacantes malintencionados para acceder a información confidencial, dañar los sistemas o interrumpir los servicios.

Entre los detalles técnicos intrínsecos de la implementación se encuentran:

- Tecnologías empleadas en la implementación como lenguajes de programación, manejadores de bases de datos, patrones o plantillas de programación (frameworks) nombres de entidades del modelo de datos de la fuente y heurísticas.*
- Metadatos o atributos clave para la búsqueda y localización de personas.*
- Las fortalezas y debilidades de los algoritmos.*

Al respecto, resulta importante considerar que difundir los detalles técnicos de los algoritmos implementados, ante el auge tecnológico al alcance de cualquier ciudadano o bien, de integrantes de la delincuencia organizada, esa experticia y conocimiento podría potencialmente convertirse en un riesgo, representando una amenaza a la seguridad pública, pues ante tal escenario se verían afectadas investigaciones de los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.



Ahora bien, difundir cualquier dato o información relacionada con los algoritmos del Banco Nacional de Datos Forenses, revelaría datos concernientes a la capacidad de repuesta tecnológica e informática e implicaría revelar el estado de fuerza de la Institución, ya sea en el sentido de la infraestructura tecnológica con la que cuenta o de la que carece, lo que causaría un grave perjuicio a las actividades de investigación y persecución de los delitos, propias de este órgano autónomo encargado de la Seguridad Pública, lo que constituye un riesgo real y una amenaza a la seguridad pública que conforme el artículo 21, párrafo noveno constitucional comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley.

En ese contexto se procede a señalar el daño real, demostrable e identificable que ocasionaría entregar los algoritmos, caso por caso, según lo siguiente:

En ese sentido se reserva la información correspondiente a los algoritmos del Banco Nacional de Datos Forenses, ya que conociendo los detalles de implementación de los algoritmos se podrían ejecutar tareas automatizadas para inferir los contratos de servicio y realizar ataques para dañar las fuentes de información o causar inestabilidad en los sistemas, ya que no debe perderse de vista que el Banco Nacional de Datos Forenses, por su naturaleza, interconecta fuentes de información heterogéneas.

Asimismo, el dar conocer los metadatos o atributos clave de implementación de los algoritmos, sería perjudicial ya que, algún ciudadano con conocimiento informático, o bien miembro de la delincuencia organizada, podría realizar ingeniería inversa y obtener información que le permita adoptar otras medidas para anular la eficiencia de los algoritmos implementados, en repercusión directa de las víctimas del delito de desaparición forzada, e incluso buscar alguna vulnerabilidad informática e intentar acceder ilícitamente a las fuentes de información que interconecta el Banco Nacional de Datos Forenses.

Por lo tanto, los algoritmos del Banco Nacional de Datos Forenses constituyen datos técnicos de la infraestructura tecnológica que se utiliza para realizar actos de investigación de los delitos, bajo la conducción y mando del agente del Ministerio Público de la Federación, a fin de recabar los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente.

Por ende, de revelarse pueden ser aprovechados por agentes externos y la delincuencia para conocer la capacidad de reacción de esta Fiscalía General de la República en la investigación del delito, pues con ello, se facilitaría que organizaciones criminales o personas con fines delictivos identifiquen posibles vulnerabilidades con el objetivo de ejecutar posibles ataques remotos, accesos no autorizados y con ello, eludir las diversas acciones tácticas y estratégicas encaminadas a la investigación de los delitos o actuar en contra de las víctimas del



delito de desaparición forzada de personas, de desaparición cometida por particulares y otros delitos del orden federal y local.

El conocimiento público de esta información podría traer como consecuencia que individuos o grupos delincuenciales utilicen los datos en referencia para atentar en cualquier momento contra de las acciones de esta Fiscalía General de la República respecto a las políticas o temas de seguridad nacional, pues el Banco Nacional de Datos Forenses podría verse vulnerado y con ello perder su efectividad atendiendo a la finalidad de la generación de inteligencia que permitan obtener un juicio favorable en contra de elementos de la delincuencia organizada y el auxilio de víctimas de delito que muchas veces se encuentra en cautiverio como en el caso de delito de secuestro o trata de personas.

Desde esa perspectiva, la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que, dar a conocer los algoritmos del Banco Nacional de Datos Forenses revelaría datos concernientes a la capacidad de repuesta tecnológica e informática de esta institución, puestos a disposición de personas ajenas a las Instituciones de seguridad, implicaría que dicha información llegara a manos de los integrantes de grupos delictivos, lo que, considerando las condiciones de determinadas zonas del país, en las que la existencia de mercados criminales cada vez más amplios y el creciente surgimiento de organizaciones delincuenciales de corte trasnacional, representa un riesgo de perjuicio al orden público y la paz social, pues se podría atentar en contra de la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas.

Asimismo, es preciso señalar que, la información se encuentra conformada por registros de operaciones interinstitucionales realizadas por los tres órdenes de Gobierno, al igual que por organismos internacionales que resultan útiles para para generar productos de análisis estratégico que permiten, a partir del conocimiento del fenómeno delictivo, la construcción de líneas de acción que propicien la preservación del orden público.

De ahí, es dable colegir que las medidas que implemente esta Fiscalía General de la República, o cualquier otra institución encargada de preservar la seguridad pública, deben ser verdaderamente funcionales para garantizar su eficacia, por lo que, revelar cualquier tipo de información al respecto, no solo afecta el intercambio de información en la materia, sino que entorpecería las diversas fuentes de información y con ellos la persecución de los delitos, considerando que la información incide de manera directa en las tácticas para el combate a la delincuencia y en la toma de decisiones al respecto.

II. El riesgo de perjuicio que supondría la publicidad de la información supera el interés público general, pues si bien es cierto que el acceso a la información se encuentra consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su correlativa Ley General, como un derecho humano que debe ser



garantizado por el Estado y que, en su atención los sujetos obligados invariablemente deberán apegarse al principio de máxima publicidad; también lo es que, con la difusión de la información sobre la individualización de los casos y el riesgo ya descrito que supone su publicación, se vulnera un interés público superior y colectivo, frente a uno individual o particular y fortuito, pues con la clasificación de la información que se invoca, lo que se busca es el orden público y la paz social, a través de la salvaguarda de la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, para la consecución de la seguridad pública como función a cargo del Estado, en este caso de esta Institución como representante social de la federación encargado de la investigación y persecución de los delitos.

En ese tenor, el informar los algoritmos de búsqueda del Banco Nacional de Datos Forenses revelaría datos concernientes a la capacidad de repuesta tecnológica e informática de esta institución supone un perjuicio que supera el interés público general, pues, poner en riesgo la investigación de los delitos impide el cumplimiento de la seguridad pública, que constituye aquella función del Estado, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.

Lo anterior, ya que la difusión de los detalles técnicos de los algoritmos desarrollados e implementados permitiría que organizaciones criminales o personas con fines delictivos pudieran acceder a información confidencial, dañar los sistemas o interrumpir los servicios, e incluso anular la eficiencia de los algoritmos implementados, impactando la capacidad de reacción y en la revelación del estado de fuerza de esta Institución de procuración de justicia, transgrediendo así lo dispuesto en los artículos 21, párrafo noveno y 102, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, la clasificación de la información atiende a un ejercicio de ponderación de derechos, en el que se coloca al interés general por encima de un interés particular, por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

En ese orden de ideas se reitera que con la entrega de la información solicitada se obstaculiza el combate al crimen organizado, ya que en caso de que la información requerida cayera en manos de los integrantes de la delincuencia, tendrían a su disposición información de inteligencia y contrainteligencia generada para la investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada, que revela las estrategias y capacidades de esta Fiscalía General de la República, utilizadas exclusivamente en contra de los miembros de las organizaciones delictivas, y así verse afectada la Seguridad Pública y Nacional traduciéndose en un interés particular sobre el interés público a cargo de esta Representación Social Federal.



El divulgar la información referente a los algoritmos del Banco Nacional de Datos Forenses, supone un perjuicio que supera el interés público general de conocer la información requerida, pues en nada resulta útil para que el público comprenda las actividades que este sujeto obligado lleva a cabo para la investigación de los delitos del orden federal y esclarecimiento de los hechos, por el contrario, su difusión permitiría que las organizaciones criminales utilizaran dicha información, vulnerando así la capacidad de reacción de la Institución, para dar respuesta y atención de las investigaciones y combate a la delincuencia organizada que lleva a cabo esta Fiscalía.

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, toda vez que, la información requerida, es decir proporcionar la información correspondiente a los algoritmos del Banco Nacional de Datos Forenses revelaría datos concernientes a la capacidad de repuesta tecnológica e informática de esta institución, utilizados para cumplimentar las facultades constitucionales conferidas a este sujeto obligado, la individualización de los casos, es decir, el resto de la información se proporciona, por lo que la atención se apega al principio de máxima publicidad y al mismo tiempo se cumple con la obligación por parte de esta Institución del debido resguardo de la información que obra en los archivos institucionales y que con su divulgación se causaría una afectación a los interés institucionales.

En ese sentido, la presente clasificación se adecúa al principio de proporcionalidad, toda vez que se justifica reservar su divulgación por el riesgo de vulnerar y poner en peligro la capacidad y margen de operación de este sujeto obligado en materia de seguridad pública, en su vertiente de procuración de justicia, esto es, en la investigación de los delitos del orden federal, ya que, con la difusión de la información se pueden revelar vulnerabilidades en la seguridad de los sistemas, lo que podría ser aprovechado por atacantes malintencionados para acceder a información confidencial, dañar los sistemas o interrumpir los servicios y con ello menoscabar las funciones de la Fiscalía General de la República.

Atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información referente a los algoritmos del Banco Nacional de Datos Forenses, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información porque se encuentra justificada al tratarse de especificaciones que contribuyen a las tareas de investigación y persecución de los delitos asignadas al Ministerio Público de la Federación, de ahí que se considere que la reserva de dichos datos, es el medio menos restrictivo y que aporte mayor seguridad a la colectividad.

Difundir las características de la tecnología utilizada para el desarrollo de actividades que permitan coadyuvar con el Agente del Ministerio Público de la Federación a través de la elaboración de diversos productos de inteligencia. Representa una sublevación que amenaza el orden institucional del Estado mexicano, toda vez que representa un riesgo para la integridad, estabilidad y permanencia del mismo, al poner en peligro las labores de inteligencia y



contrainteligencia implementadas para el combate a la delincuencia, menoscabando las funciones a cargo de la Federación, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, integridad y el ejercicio de los derechos de las personas así como el mantenimiento del orden público.

En razón de lo anterior, la reserva de la información requerida, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, toda vez que la naturaleza de dicha información resulta proporcional a atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la Seguridad Pública y Nacional, y en las acciones tendientes a su preservación, en este sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos, el interés general se coloca por encima de un interés particular, por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida al interés privado.

Prueba de daño del artículo 110, fracción VII (persecución de los delitos):

I. Como se mencionó anteriormente, la persecución de los delitos constituye una facultad legalmente conferida a este Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 5 de la Ley de la Fiscalía General de la República, a fin de preservar en general el orden público y la paz social a través de una procuración de la justicia eficaz, con el objeto de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas.

Bajo esa premisa fundamental, los aludidos Lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información, disponen con claridad que, si con la difusión de determinada información se obstruyen las funciones que ejerce el Ministerio Público en un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite, se le podrá considerar a esa información como clasificada como reservada.

En ese orden de ideas, se reitera que, se reservan los algoritmos del Banco Nacional de Datos Forenses, ya que se revelaría detalles técnicos sobre la implementación de algoritmos de búsqueda de personas que incluso pueden revelar vulnerabilidades en la seguridad de los sistemas, lo que podría ser aprovechado por atacantes malintencionados para acceder a información confidencial, dañar los sistemas o interrumpir los servicios, con el fin de realizar ataques para dañar las fuentes de información o causar inestabilidad en los sistemas, o bien adoptar otras medidas para anular la eficiencia de los algoritmos implementados, en repercusión directa de las víctimas del delito de desaparición forzada de personas, de desaparición cometida por particulares y otros delitos del orden federal y local.

En ese sentido se reserva la información correspondiente a los algoritmos del Banco Nacional de Datos Forenses, ya que conociendo los detalles de implementación de los algoritmos se podrían ejecutar tareas automatizadas para inferir los contratos de servicio y realizar ataques para dañar las fuentes de información o causar inestabilidad en los sistemas, ya que no debe perderse de vista que el Banco



Nacional de Datos Forenses, por su naturaleza, interconecta fuentes de información heterogéneas.

Asimismo, el dar conocer los metadatos o atributos clave de implementación de los algoritmos, sería perjudicial ya que, algún ciudadano con conocimiento informático, o bien miembro de la delincuencia organizada, podría realizar ingeniería inversa y obtener información que le permita adoptar otras medidas para anular la eficiencia de los algoritmos implementados, en repercusión directa de las víctimas del delito de desaparición forzada, e incluso buscar alguna vulnerabilidad informática e intentar acceder ilícitamente a las fuentes de información que interconecta el Banco Nacional de Datos Forenses.

Por lo tanto, los algoritmos del Banco Nacional de Datos Forenses constituyen datos técnicos de la infraestructura tecnológica que se utiliza para realizar actos de investigación de los delitos, bajo la conducción y mando del agente del Ministerio Público de la Federación, a fin de recabar los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente.

En ese contexto, el divulgar la información solicitada, implica revelar datos técnicos y tecnología (software) y productos que se utilizan para el desarrollo de las actividades institucionales, de conformidad con el artículo 102, Apartado A, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, párrafo segundo y 102, Apartado A constitucionales resultan labores cotidianas para esta Fiscalía General de la República, a fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 20, Apartado A, fracción I Constitucional, respecto del objeto del proceso penal que es **el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.**

Al efecto, es necesaria la tecnología con la que se cuenta, a efecto de contar con un banco de datos que interconecta fuentes de información heterogéneas, que son útiles para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas y no localizadas, así como para la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas, de desaparición cometida por particulares y otros delitos del orden federal y local, para demostrar la culpabilidad de las personas conforme lo establezca el tipo penal de que se trate en el orden federal, ante la autoridad jurisdiccional.

En esa tesitura **resulta un riesgo real, demostrable e identificable** la divulgación de los algoritmos del Banco Nacional de Datos Forenses, ya que revelaría datos concernientes a la capacidad de repuesta tecnológica e informática de esta institución al contener características que conllevarían identificar el tipo de tecnología utilizada para la interconexión con otras bases, registros o sistemas a cargo de autoridades de los distintos órdenes de gobierno que contengan información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como para la investigación de los hechos que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas señala como delitos.



a efecto de concentrar la información de forma tal que estén interconectados y actualizados en tiempo real a efecto que las autoridades competentes estén en condiciones de llevar a cabo las consultas para el ejercicio de sus atribuciones.

El conocimiento público de esta información podría traer como consecuencia que individuos o grupos delincuenciales utilicen los datos en referencia para atentar en cualquier momento contra de las acciones de esta Fiscalía General de la República respecto de la delincuencia organizada, pues conociendo los detalles de implementación de los algoritmos, podrían ejecutar tareas automatizadas para realizar ataques para dañar las fuentes de información o causar inestabilidad en los sistemas.

En este orden de ideas, si se ventilara la información que se solicita, se vulneraría el sigilo de las técnicas de investigación utilizadas para lograr la intención del legislador y con ello obtener casos de éxito en la investigación de los delitos o actuar en contra de las víctimas del delito de desaparición forzada de personas, de desaparición cometida por particulares y otros delitos del orden federal y local, así como en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.

Es así que, al encontrarse frente a organizaciones delictivas estructuradas a través de grupos o células, se puede afirmar que se necesita conservar el **mayor sigilo no tan solo en las propias técnicas de investigación del delito que le compete investigar a esta Fiscalía, sino también en la infraestructura con la que los lleva a cabo**, puesto que los miembros de la delincuencia organizada han establecido una perfecta división del trabajo, en donde su comportamiento representa **la actuación fraccionada de una voluntad común** y así con esa comunicabilidad de acciones y circunstancias se encuentran potencialmente preparados para ejecutar diversos delitos de los señalados en el propio artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues conscientes de su estancia en la agrupación, los miembros de dicho conglomerado criminal realizan conductas permanentes que por sí o unidas con otras, tienen como finalidad la de ejecutar los delitos mencionados.

Por lo que se reitera que, si los elementos de la delincuencia organizada obtienen los metadatos o atributos clave de implementación de los algoritmos, podría realizar ingeniería inversa y obtener información que le permita adoptar otras medidas para anular la eficiencia de los algoritmos implementados, en repercusión directa de las víctimas del delito de desaparición forzada, e incluso buscar alguna vulnerabilidad informática e intentar acceder ilícitamente a las fuentes de información que interconecta el Banco Nacional de Datos Forenses.

Así las cosas, se precisa que, con la divulgación de los detalles de implementación de los algoritmos del Banco Nacional de Datos Forenses, se actualiza un **riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público** consistente en la persecución de los investigación de los hechos que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas señala como delitos, en virtud de que



se pone en riesgo la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, con lo que se imposibilita la concreción de un orden público y de la paz social.

Lo anterior es así, toda vez que, cada uno de las bases, registros o sistemas a cargo de autoridades de los distintos órdenes de gobierno contienen información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como para la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas, de desaparición cometida por particulares y otros delitos del orden federal y local.

Así, como se ha señalado en argumentos precedentes, el hecho de que personas pertenecientes al crimen organizado tengan conocimiento de información sobre datos concretos inherentes a especificaciones técnicas, les permite allegarse de información de las indagatorias que, tanto las personas servidoras públicas de esta Fiscalía General de la República, como la autoridad investigadora, tienen el deber de resguardar, tal y como lo mandata el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 128 y 129 que conjuntamente señalan que en todas las etapas de procedimiento penal el Ministerio Público debe actuar con absoluto apego a la Constitución, a dicho Código y a la normatividad aplicable, conduciendo la investigación con la diligencia necesaria que permita garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso.

Por su parte, la Ley de la Fiscalía General de la República, en sus artículos 4 y 5 disponen que, en general las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República, y específicamente el Ministerio Público de la Federación, como representante de los intereses de la sociedad en la investigación y persecución de los delitos federales, regirán su actuación con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, respeto a los derechos humanos, perspectiva de protección integral a los derechos de la niñez y adolescencia y debida diligencia, respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos de las personas imputadas y las víctimas.

En complemento con lo expuesto, los artículos 47 y 97 de la aludida Ley de esta Fiscalía General, disponen que es obligación de las personas servidoras públicas que la integran, preservar la secrecía, reserva y confidencialidad de las bases de datos, sistemas, registros, archivos y asuntos que conozcan que contengan información relacionada con datos personales o con datos de los actos de investigación, como lo es la información contenida en el Banco Nacional de Datos Forenses, que contiene datos con información útil para coadyuvar en la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y otros delitos, así como, para apoyar en los procesos de búsqueda, localización e identificación humana de personas desaparecidas o no localizadas.

La información solicitada no supera el interés público en el presente caso, es decir, el interés social que la actividad constitucionalmente asignada al Ministerio Público consistente en la investigación y persecución de los delitos, persigue y que se pondría en riesgo al revelar lo solicitado, por lo que se encuentra por encima de un interés.



*particular de conocer la información solicitada, **toda vez que el éxito de la investigación que representa en beneficio de la sociedad, está por encima del ejercicio de transparencia aludido, pues a la sociedad le interesa que se cumpla el objeto del proceso penal, se obtenga la reparación del daño a las víctimas del delito y la justicia; por ende, la investigación y persecución de los delitos se ubica por encima de los intereses particulares de conocer este tipo de información.***

De esa manera, se concluye que la divulgación de datos específicos de los algoritmos del Banco Nacional de Datos Forenses, en la función de esta Institución en la persecución de los delitos federales, atentaría en contra de lo dispuesto en la diversa normativa en la materia, relativa a la secrecía y sigilo de las investigaciones, además, se causaría una afectación al debido proceso, lo que mermaría la capacidad del Ministerio Público de la Federación en la búsqueda de una procuración de justicia eficaz, que permita la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos para la consecución del orden y la paz pública.

Asimismo, el proporcionar la información de referencia, representa un riesgo real, demostrable e identificable, ya que se vincularía con información sustancial, utilizada para la realización de las funciones sustantivas de la Institución, lo que vulnera la capacidad con la que cuenta la Fiscalía General de la República para la investigación y persecución de los delitos en el orden federal, que llevan a cabo de forma esencial los agentes del Ministerio Público de la Federación, a través de la integración de las averiguaciones previas y las carpetas de investigación, información que de ser conocida por grupos criminales, sería utilizada para evadir, destruir u ocultar los medios de prueba recopilados para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del o los responsables de la comisión de un ilícito, obstruyendo la prevención o persecución de los delitos que son competencia de esta Fiscalía.

II. El riesgo de perjuicio que supondría la publicidad de la información supera el interés público general, pues si bien es cierto que el acceso a la información se encuentra consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su correlativa Ley General, como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado y que, en su atención los sujetos obligados invariablemente deberán apegarse al principio de máxima publicidad; también lo es que, con la difusión de la información sobre la individualización de los casos y el riesgo ya descrito que supone su publicación, se vulnera un interés público superior y colectivo, frente a uno individual o particular y fortuito, pues con la clasificación de la información que se invoca, lo que se busca es una efectiva persecución de los delitos con el objeto de salvaguardar los derechos de las personas a efecto de esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la



Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

En ese tenor de ideas información solicitada no supera el interés público en el presente caso. es decir, el interés social de la actividad constitucionalmente asignada al Ministerio Público de la Federación, consistente en la persecución de los delitos, pues se pondría en riesgo al revelar metadatos o atributos clave de los que se valen los algoritmos del Banco Nacional de Datos Forenses para la búsqueda de datos útiles para acreditar la comprobación de la culpabilidad de los delitos de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y otros delitos; por lo que se encuentra por encima de un interés particular de conocer la información solicitada, toda vez que el éxito de la investigación que representa en beneficio de la sociedad que está por encima del ejercicio de la transparencia aludida, pues a la sociedad le interesa que se cumpla el objeto del proceso penal. Esto es el interés público en la persecución de los delitos se ubica por encima de los intereses particulares de conocer este tipo de información.

En este sentido, la clasificación de la información atiende a un ejercicio de ponderación de derechos, en el que se coloca al interés general por encima de un interés particular, por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

Difundir la información requerida, superaría el interés público general, considerando que las funciones principales de esta Fiscalía, son entre otras; la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; etcétera; por lo que la divulgación de la información constituiría un riesgo en perjuicio a la seguridad general, misma que esta Fiscalía, tiene como obligación garantizar a la Sociedad; toda vez que de conocer la información, la delincuencia organizada la utilizaría en pro de la capacidad de respuesta de los agentes del Ministerio Público Federal, peritos y policías de investigación ante el esclarecimiento y persecución de los delitos del orden federal.

III. *La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, toda vez que, de la totalidad de la información requerida, únicamente se resguardan los datos relativos a datos inherentes a datos de especificaciones técnicas que permiten vulnerar la información contenida en bases, registros o sistemas a cargo de autoridades de los distintos órdenes de gobierno que contengan información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como para la investigación delitos de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y otros delitos, es decir, el resto de la información se proporciona, por lo que la atención se apega al principio de máxima publicidad y al mismo tiempo se cumple con la obligación por parte de esta Institución del debido resguardo de la*



información que obra en los archivos institucionales y que con su divulgación se causaría una afectación a los intereses institucionales.

En ese sentido, el clasificar los datos peticionados, se traduce en la salvaguarda de un interés general sobre un interés individual, es decir, se privilegia la salvaguarda de la sociedad al encontrarse esta Institución facultada para la persecución de delitos del orden federal, ello en virtud de que al obtener información de manera "desagregada" su conjunción se encuentra relacionada con herramientas encargadas de generar información para acreditar la comisión de delitos; lo cual resulta de mayor relevancia para la sociedad.

Robustece lo anterior lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 12 de junio de 2019, al fallar la contradicción de tesis 149/2019, pues hizo referencia a que el mandato legislativo consistente en la estricta reserva de la indagatoria, obedece a la protección del interés público y a la salvaguarda del derecho a la seguridad, que constituyen, indudablemente, fines legítimos, en virtud de que las actuaciones del Ministerio Público contienen hechos que, al ser del conocimiento público, ponen en peligro la investigación y eficacia en la persecución de delitos.

De ahí que la reserva invocada sea proporcionalmente válida ante el derecho de acceso a la información, debiendo prevalecer la reserva pues es necesario que el Estado cumpla con los objetivos del proceso penal, esto es: el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Por último, atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información de los algoritmos del Banco Nacional de Datos Forenses, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, porque si bien la información en posesión de todos los Sujetos Obligados es pública, lo cierto es que también el derecho de acceso a la información se encuentra acotado por razones previstas en la normativa en la materia, ya que el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación, que en el caso que nos ocupa se justifica al existir un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos. En tal virtud, es de señalarse que el interés público general se coloca por encima de un interés particular, debido a que la naturaleza de la información reservada resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación invocada consistente en la prevención y persecución de delitos federales.

Por lo antes señalado, resulta aplicable la Tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:

"DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la



última parte del artículo 6º. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados. Época: Novena Época. Registro: 797967. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000. Materia(s): Constitucional Tesis: P. LX/2000. Página: 74."

Finalmente, se informa que el acta de la clasificación antes referida podrá localizarla en el momento que concluya su formalización en:

Octava Sesión Ordinaria 2025

<http://www.fgr.org.mx/en/transparencia/AccesoInformacionPublica>

Requerimiento "10) El Anexo indica que las acciones realizadas por los usuarios derivadas de procesos de consulta se preservarán en la bitácora de auditoría.

Solicito:

a) el número de acciones de consulta."

Respuesta.- Se identificaron un total de **2,152 acciones de búsqueda relacionadas con consultas al Banco Nacional de Datos Forenses.**

Requerimiento "11) El Anexo define a los recursos de información como "fuentes de información almacenadas en medios digitales, las cuales cuenten con las características necesarias para su explotación a través de herramientas informáticas del BNDF".

Solicito:

a) **el número de recursos informáticos actualmente interconectados con el Banco, desagregados por institución que lo detenta de forma primaria."**



Respuesta.- Al día de la fecha, se encuentran los siguientes diez recursos de información interconectados al Sistema de Búsqueda del Banco Nacional de Datos Forenses:

1. Base de Datos Ante Mortem y Post Mortem – Fiscalía General de la República
2. Alerta Amber - Fiscalía General de la República
3. Registro Nacional del Delito de Tortura – Fiscalía General de la República
4. Base Nacional de Información Genética - Fiscalía General de la República
5. Registro Forense Federal - Fiscalía General de la República
6. Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas - Fiscalía General de la República
7. Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas – Fiscalía General de la República
8. Sistema Nacional de Información Nominal – Fiscalía General de la República
9. Sistema Estratégico de Seguimiento sobre Expresiones Delictivas – Fiscalía General de la República
10. Registro Nacional de Detenciones – Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Requerimiento "12) Solicito el número de personas fallecidas identificadas a partir de hipótesis generadas por el Banco"

Respuesta.- No se cuenta con registros de lo solicitado. Lo anterior es así, ya que, al tenor de las disposiciones legales y normativas en la materia, el Banco Nacional de Datos Forenses constituye una herramienta para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y la investigación de los delitos materia de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Bajo ese contexto, los hallazgos obtenidos de las consultas al BNDF no deben ser interpretados de forma aislada para la búsqueda, identificación y/o localización de las personas, puesto que los mismos deben ser aportados a las distintas autoridades ministeriales a cargo de las investigaciones en curso, para que puedan ser corroborados y/o concatenados con otros indicios, datos, medios de prueba o actos de investigación que abonen al esclarecimiento de los hechos.

En este orden de ideas, la determinación respecto de la identificación de personas fallecidas debe atender a que dichas acciones de investigación sean agotadas y a su vez registradas en los diferentes recursos de información interconectados al Banco Nacional de Datos Forenses.

Las coincidencias que se obtienen en las consultas al buscador del Banco Nacional de Datos Forenses no constituyen una identificación en sí mismas, pues no es ésta la función del Banco. Únicamente arroja resultados sobre datos coincidentes entre los registros de las distintas bases que lo componen.



Finalmente, se le hace saber que la presente respuesta se emite de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual refiere que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en el que se encuentre, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

Lo anterior, toda vez que de la armónica interpretación de los preceptos legales antes mencionados, se advierte que los particulares podrán requerir a los sujetos obligados el acceso a la documentación que obre dentro de sus archivos, lo que implica que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública regula el acceso a documentos que obren en los archivos del sujeto obligado, no así la generación de nuevos documentos.

*Robustece lo anterior, lo sostenido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el criterio de interpretación **SO/003/2017**, el cual se inserta a continuación para su pronta referencia:*

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información."

Si derivado de la respuesta a su solicitud de información le surge alguna duda, puede llamar al teléfono (55) 5346 0000, extensión 505727; o bien, escribirnos al correo electrónico leydetransparencia@fgr.org.mx, en donde con gusto le atenderemos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo." (Sic)

VI. EXPEDICIÓN DE LEYES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. El veinte de marzo de dos mil veinticinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reforma el artículo 37 fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.



VII.- RECURSO DE REVISIÓN. El veintiuno de marzo de dos mil veinticinco, una persona interpuso recurso de revisión a través la Plataforma Nacional de Transparencia, en contra de la respuesta otorgada por la Fiscalía General de la República, en los siguientes términos:

"Hola.

En mi solicitud 330024625000200 requerí a la FGR diversos números y documentos relacionados con el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), conforme al Anexo Técnico de los Lineamientos L/001/2022 (<https://aplicaciones.fgr.org.mx/MotorDeBusqueda/DownloadDocumento?NombreDocumentoPDF-AnexoTecnicoBNDF.pdf>)

Tras una prórroga, la FGR respondió en la PNT -sin notificarme por el correo electrónico que dispuse- que debía proporcionar un medio de entrega, y vía correo electrónico lo hice el 5mar24, a pesar de también haber especificado originalmente que el medio de entrega debía ser electrónico. A vuelta de correo recibí el oficio FGR/UETAG/001157/2025, de 41 páginas, que no quedó cargado en la PNT. Lo anexo para pronta referencia.

Me quejo por falta de exhaustividad en la respuesta y por la reserva de algunos documentos.

En el numeral 1 solicité el número de usuarios, y en el inciso a) especifiqué que debía desglosarse por institución de adscripción. La FGR informa de 109 usuarios y enlista 22 instituciones de adscripción, pero no informa cuántos usuarios corresponden a cada institución.

En el numeral 3 indagué por cursos de capacitación, incluido a cuántas personas y de qué instituciones se había capacitado. La FGR me informa que "se dio inicio a la impartición del curso...", pero se me informa el número de personas, ni se hace pronunciamiento al respecto.

También solicité los videos de capacitación, la FGR informa que hay uno, pero lo reserva. También, en respuesta al numeral 9, reserva los algoritmos implementados.

Considero que el BNDF está previsto en la Ley General en Materia de Desaparición, y su función se relaciona estrechamente con búsqueda de personas desaparecidas de investigación de desapariciones forzadas, es decir, con violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Considero que la FGR así lo entiende cuando determinó, en el Cuarto de los Lineamientos (<https://aplicaciones.fgr.org.mx/MotorDeBusqueda/DownloadDocumento?NombreDocumentoPDF=Lineamientos%20L-001-2022.pdf>) facultar a la titular de la fiscalía en materia de derechos humanos para liderar la implementación del BNDF. También considero que la falta de implementación del BNDF ya ha sido evaluada como una violación de derechos humanos por la justicia constitucional (<https://centroprodh.org.mx/2023/08/28/a-3-mesesde-anunciarse-su-puesta->



en-marcha-el-banco-nacional-de-datos-forenses-sigue-sinoperar/), y su operación, que inició con años de retraso según el plazo previsto en los transitorios de la Ley General en Materia de Desaparición, es objeto del cumplimiento de la sentencia de amparo. Las leyes federal y general de transparencia establecen que la información relacionada con graves violaciones de ddhh y delitos de lesa humanidad no son susceptibles de reserva. La opacidad al respecto de esta herramienta tan sensible para las víctimas no abona a la confianza en las instituciones, ni en los resultados que se espera que arroje, menos ahora que la Presidenta del país anunció nuevas reformas en el tema para volver a cambiar la estrategia que supuestamente dependía del BNDF. Estoy segura de que hay una manera menos restrictiva de preservar la seguridad pública y, a la vez, mi derecho de acceso a la información, que la reserva total, por lo que ruego al órgano garante que revoque la respuesta del sujeto obligado y le ordene encontrar esa manera." (Sic)

VIII.-REFORMA AL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. El ocho de abril de dos mil veinticinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, mediante la cual se modificaron, entre otros, los artículos 5 y 206, incorporando diversas unidades administrativas y precisando la integración de las áreas del Órgano Interno de Control, destacando la creación de esta Unidad de Vigilancia y Cumplimiento en Materia de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales.

IX.- AUTORIDAD GARANTE. El dieciocho de abril de dos mil veinticinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/OIC/AG/002/2025, en el cual se estableció que esta Unidad de Vigilancia y Cumplimiento en Materia de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República fungirá como Autoridad Garante en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en la Fiscalía General de la República.

X.- COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO SOBRE LA MIGRACIÓN DE EXPEDIENTES. El veintisiete de junio de dos mil veinticinco, la Directora General de Plataformas para la Integridad y Transparencia en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicitó se fijara fecha de inicio para la reanudación de actividades en los asuntos en la materia.

XI.- ACUERDO DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES. El treinta de junio de dos mil veinticinco, el entonces Titular de la Unidad de Vigilancia y Cumplimiento en Materia de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República emitió el "Acuerdo mediante el cual la Autoridad Garante del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República establece la reanudación de los plazos relacionados con los expedientes que



obran en posesión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno", fijando como fecha de reanudación de actividades el uno de julio de dos mil veinticinco.

XII.- MIGRACIÓN DE ASUNTOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO. El siete de julio de dos mil veinticinco, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno remitió a esta Autoridad Garante, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, diversos asuntos que tenía bajo su resguardo.

XIII.- HABILITACIÓN DEL BUZÓN-SICOM. El diecisiete de julio de dos mil veinticinco, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició con los trabajos de habilitación del buzón-SICOM a esta Autoridad Garante, mediante el cual se establecería la interacción entre los sujetos obligados y las Autoridades Garantes.

XIV.- RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES POR PARTE DE LA AUTORIDAD GARANTE. El veintiocho de julio de dos mil veinticinco, se celebró una diligencia de entrega-recepción entre el entonces Titular de la Unidad de Vigilancia y Cumplimiento en Materia de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en la cual fueron transferidos diversos expedientes físicos y electrónicos.

XV. TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN.

a) Admisión del recurso de revisión. El once de julio de dos mil veinticinco, esta Autoridad Garante emitió acuerdo de admisión del recurso de revisión e integró el expediente respectivo, otorgándoles un plazo de siete días hábiles, contados a partir de dicha notificación, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, de conformidad con el artículo 153, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

b) Alegatos del sujeto obligado. El siete de agosto de dos mil veinticinco, esta Autoridad Garante recibió el oficio de alegatos número FGR/UETAG/003602/2025, emitido por la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental del sujeto obligado, en el que se aprecia lo siguiente:

"ALEGATOS

PRIMERO. Es preciso mencionar que esta Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental **cumplió cabalmente con los tiempos y formas** previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente al momento de la interposición de la solicitud, así como con lo dispuesto en los



entonces Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública, puesto que la petición se derivó para su atención a la **Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, a la Agencia de Investigación Criminal y a la Oficialía Mayor**, toda vez que de las atribuciones que les confiere la Ley de la Fiscalía General de la República, el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República y demás normatividad aplicable, podrían contar con la información solicitada.

SEGUNDO. Derivado de los agravios formulados por el ahora recurrente, se atienden puntualmente cada uno de ellos en los siguientes términos:

- "En el **numeral 1** solicité el número de usuarios, y en el inciso a) especifiqué que debía desglosarse por institución de adscripción. La FGR informa de 109 usuarios y enlista 22 instituciones de adscripción, pero **no informa cuántos usuarios corresponden a cada institución.**"

Después de realizar una búsqueda puntual de la información solicitada se identificó que las instituciones a las que se encuentran adscritas las altas de los usuarios del Banco Nacional de Datos forenses corresponden a las siguientes:

- Fiscalía General de la República/ 24 usuarios
- Fiscalía General Justicia del Estado de Tabasco/ 3 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de México/ 3 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas / 1 usuario
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes/ 4 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche/ 5 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa/ 5 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán/ 3 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas/ 5 usuarios
- Fiscalía General del Estado de Durango/ 2 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla/ 5 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León/ 4 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Colima/ 1 usuario
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora/ 6 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco/ 5 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas/ 5 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California/ 5 usuarios
- Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo / 5 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz/ 5 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila / 4 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro/ 5 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo/ 4 usuarios

"En el **numeral 3** indagué por cursos de capacitación, incluido a cuántas personas y de qué instituciones se había capacitado. La FGR me informa que "se



dio inicio a la impartición del curso...". **pero se me informa el número de personas, ni se hace pronunciamiento al respecto.**

También solicité los **videos de capacitación**, la FGR informa que hay uno, pero lo **reserva**."

Por lo que hace a la **primera parte del agravio**, se informa que en julio de 2023 se dio inicio a la impartición del curso de capacitación dirigido inicialmente a **14 personas**, mismas que eran encargadas de realizar las consultas en el Banco Nacional de Datos Forenses, perteneciente al entonces Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), ahora Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC), contando con la participación de las personas asignadas a esa tarea dentro del mencionado Centro.

Posteriormente, durante el año 2024 se celebraron dos jornadas de capacitación a **209 personas** servidoras públicas de distintas fiscalías especializadas del país; esta actividad se realizó en la modalidad de "formador de formadores", es decir, se impartieron los conocimientos del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) a personal enlace designado por las Procuradurías y Fiscalías de Justicia en el país, las que habrían de replicar dichos conocimientos con el personal de su respectiva instancia. En el presente año 2025, se han capacitado a **29 personas**.

Por otro lado, respecto a los **videos** de capacitación, **se reitera la respuesta primigenia**, esto es que existe una imposibilidad jurídica para proporcionar lo solicitado, toda vez que se trata de información que actualiza los supuestos de clasificación de **reserva**, en términos de lo dispuesto en el artículo 110 fracciones I, VII y XIII Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los numerales DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO SEXTO y TRIGÉSIMO SEGUNDO de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, normativa vigente al momento de la atención de la solicitud de información que dio origen al presente recurso de revisión.

- "También, en respuesta al **numeral 9, reserva los algoritmos implementados**."

En cuanto a la reserva de los algoritmos implementados, **se reitera la respuesta primigenia**, esto es que no es procedente proporcionar la información requerida, en virtud de que actualiza el supuesto de información clasificada como reservada de conformidad con lo previsto por el artículo 110, fracciones I y VII, de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a La Información Pública (vigente al momento de la atención de la solicitud de información que dio origen al presente recurso de revisión) en virtud de que se podría comprometer la seguridad pública de la Federación y obstaculizar la prevención o persecución de los delitos.

Las precisiones señaladas, fueron hechas del conocimiento del particular a través del oficio de alcance de respuesta identificado con el número FGR/UETAG/003601/2024



de fecha 07 de agosto del año en curso, por medio del correo electrónico señalado por el recurrente para recibir todo tipo de notificaciones.

De ahí que resulta conveniente, solicitar se tenga por acreditada la atención a la solicitud de información inicial y por sobreseído el presente recurso de revisión de conformidad con el artículo 154, fracción I y 159, fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito a usted Autoridad Garante:

PRIMERO. - Tener por reconocida mi personalidad en el presente escrito de formulación de alegatos y por hechas las manifestaciones en él contenidas.

SEGUNDO. - En su oportunidad y previos los trámites legales correspondientes se **sobresea** el presente medio de impugnación en términos lo dispuesto en artículo 154, fracción I y 159, fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública." (Sic)

c) Alcance a la persona recurrente. El siete de agosto de dos mil veinticinco, se recibió el oficio FGR/UETAG/003602/2025, consistente en un alcance a la respuesta de mérito, emitido por la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental del sujeto obligado, en los términos siguientes:

"Con fundamento en lo establecido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2, 19, 41, fracciones II y V, 133 y 134 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11°, fracción XV de la Ley de la Fiscalía General de la República; 5°, fracción I, inciso b, subinciso ii y 20° del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República; derivado de la interposición del recurso de revisión número **PGRAl2502859** y en alcance a la respuesta otorgada a su solicitud de información con número de folio **330024625000200**, por la que requirió conocer:

"Me refiero al ANEXO Técnico de los Lineamientos L/001/2022 de operación del Banco Nacional de Datos Forenses (<https://aplicaciones.fgr.org.mx/MotorDeBusqueda/DownloadDocumento?NombreDocumentoPDF=AnexoTecnicoBNDF.pdf>) publicado en mayo de 2023.

1) Dicho Anexo dice que "para el acceso al sistema, será requerido un usuario y una contraseña".

Solicito: a) el número de usuarios con los que cuenta el Banco, desglosados por

a) institución de adscripción; y por

b) niveles de acceso (administrador, consulta total, consulta focalizada son los que están previstos en el anexo para ingresar con credenciales, especificar si es que hay algún otro).

2) Dicho Anexo dice que habrá un apartado para consulta pública estadística



a) Solicito se me informe en qué dirección web es posible realizar dicha consulta. En caso de que no haya una, solicito se me informe el grado de implementación de esta funcionalidad y el plazo previsto para su liberación.

3) Dicho Anexo dice que las personas usuarias deben completar un curso de capacitación. También menciona que podrán brindarse capacitaciones a través de videos que para tales efectos se produzcan. Solicito:

a) Se me informe en cuántas oportunidades se han impartido esos cursos de capacitación, a cuántas personas y de qué instituciones.

b) el número de videos que han sido producidos; y

c) los videos.

4) Dicho anexo menciona que para el otorgamiento de acceso deben formularse solicitudes que incluyan "cartas responsivas de confidencialidad". Solicito:

a) el modelo o formato de carta responsiva de confidencialidad.

5) Dicho anexo menciona "planes individualizados de Integración" por Fiscalía/Procuraduría, a los que define como "documento por el que cada una de las fiscalías/procuradurías y demás autoridades competentes emitirá el diagnóstico de disponibilidad de variables de información...". Solicito a) el número de "planes individualizados de integración" que han sido elaborados; b) las instituciones que los han elaborado. c) los planes.

6) En 4.3.1, el anexo habla de un "cronograma de implementación". Solicito se me

7) El Anexo habla de "Enlaces". Solicito una lista de las instituciones que han designado enlaces.

8) El Anexo habla de "carga masiva de información". Solicito el número de ocasiones en que se ha efectuado una carga masiva de información.

9) El Anexo indica que para confronta a través de características individualizantes y demás atributos, se diseñarán e implementarán algoritmos ponderando el peso de las características coincidentes... Solicito: a) el número de estos algoritmos que ha sido diseñado; b) el número de estos algoritmos que ha sido implementado; c) los algoritmos.

10) El Anexo indica que las acciones realizadas por los usuarios derivadas de procesos de consulta se preservarán en la bitácora de auditoría. Solicito:

a) el número de acciones de consulta.

11) El Anexo define a los recursos de información como "fuentes de información almacenadas en medios digitales, las cuales cuentan con las características necesarias para su explotación a través de herramientas informáticas del BNDF". Solicito:

a) el número de recursos informáticos actualmente interconectados con el Banco, desagregados por institución que lo detenta de forma primaria.

12) Solicito el número de personas fallecidas identificadas a partir de hipótesis generadas por el Banco.

Solicito, por último, que, en lo que respecta a la temporalidad, todas mis preguntas sean interpretadas en el sentido de aplicar desde el día en se publicó el anexo, hasta el de recepción de esta solicitud de información. Muchas gracias."



Se hace de su conocimiento que, la **Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, la Agencia de Investigación Criminal y la Oficialía Mayor**, después de realizar una búsqueda de la información, atendieron sus agravios en los siguientes términos:

- "En el **numeral 1** solicité el número de usuarios, y en el inciso a) especifiqué que debía desglosarse por institución de adscripción. La FGR informa de 109 usuarios y enlista 22 instituciones de adscripción, pero **no informa cuántos usuarios corresponden a cada institución.**"

Después de realizar una búsqueda puntual de la información solicitada se identificó que las instituciones a las que se encuentran adscritas las altas de los usuarios del Banco Nacional de Datos forenses corresponden a las siguientes:

- Fiscalía General de la República/ 24 usuarios
- Fiscalía General Justicia del Estado de Tabasco/ 3 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de México/ 3 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas / 1 usuario
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes/ 4 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche/ 5 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa/ 5 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán/ 3 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas/5 usuarios
- Fiscalía General del Estado de Durango/ 2 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla/ 5 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León/ 4 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Colima/ 1 usuario
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora/ 6 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco/ 5 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas/ 5 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California/ 5 usuarios
- Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo / 5 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz/ 5 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila / 4 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro/ 5 usuarios
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo/ 4 usuarios

"En el **numeral 3** indagué por cursos de capacitación, incluido a cuántas personas y de qué instituciones se había capacitado. La FGR me informa que "se dio inicio a la impartición del curso...", pero se me informa el número de personas, ni se hace pronunciamiento al respecto.

También solicité los **videos de capacitación**, la FGR informa que hay uno, pero lo reserva."



Por lo que hace a la primera parte de su agravio, se informa que en julio de 2023 se dio inicio a la impartición del curso de capacitación dirigido inicialmente a **14 personas**, mismas que eran encargadas de realizar las consultas en el Banco Nacional de Datos Forenses, perteneciente al entonces Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), ahora Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC), contando con la participación de las personas asignadas a esa tarea dentro del mencionado Centro.

Posteriormente, durante el año 2024 se celebraron dos jornadas de capacitación a **209 personas** servidoras públicas de distintas fiscalías especializadas del país; esta actividad se realizó en la modalidad de "formador de formadores", es decir, se impartieron los conocimientos del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) a personal enlace designado por las Procuradurías y Fiscalías de Justicia en el país, las que habrían de replicar dichos conocimientos con el personal de su respectiva instancia. En el presente año 2025, se han capacitado a **29 personas**.

Por otro lado, respecto a los **videos** de capacitación, **se reitera la respuesta primigenia**, esto es que existe una imposibilidad jurídica para proporcionar lo solicitado, toda vez que se trata de información que actualiza los supuestos de clasificación de **reserva**, en términos de lo dispuesto en el artículo 110 fracciones I, VII y XIII Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los numerales DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO SEXTO y TRIGÉSIMO SEGUNDO de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, normativa vigente al momento de la atención de la solicitud de información que dio origen al presente recurso de revisión

"También, en respuesta al **numeral 9, reserva los algoritmos implementados**."

En cuanto a la reserva de los algoritmos implementados, **se reitera la respuesta primigenia**, esto es que no es procedente proporcionar la información requerida, en virtud de que actualiza el supuesto de información clasificada como reservada de conformidad con lo previsto por el artículo 110, fracciones I y VII, de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a La Información Pública (vigente al momento de la atención de la solicitud de información que dio origen al presente recurso de revisión) en virtud de que se podría comprometer la seguridad pública de la Federación y obstaculizar la prevención o persecución de los delitos." (Sic)

El referido alcance fue notificado a la persona recurrente a través de correo electrónico en fecha siete de agosto de dos mil veinticinco.

d) Solicitud formulada por esta Autoridad Garante. El veinte de agosto de dos mil veinticinco, mediante oficio FGR/OIC/020/2025, esta Autoridad Garante solicitó a la Dirección General de Recursos de Revisión y de Inconformidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisara si subsistían actuaciones pendientes de entrega respecto de los expedientes de recursos de revisión, cumplimientos y



responsabilidades remitidos el veintiocho de julio de dos mil veinticinco por el Comité de Transferencia del entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante INAI).

e) Cierre de instrucción. El veintiuno de agosto del dos mil veinticinco, se emitió el acuerdo de cierre de instrucción, en términos de lo dispuesto en el artículo 153, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que fue notificado el nueve de septiembre del dos mil veinticinco.

f) Atención a la solicitud. El veintisiete de agosto de dos mil veinticinco, mediante oficio T003/DGRRyl/234/2025, la Dirección General de Recursos de Revisión y de Inconformidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que no existían actuaciones adicionales pendientes de entrega, precisando que las constancias en medios físicos habían sido recibidas en el estado en que fueron entregadas por el Comité de Transferencia del entonces INAI.

g) Reanudación de asuntos. El uno de septiembre de dos mil veinticinco, el Titular de esta Autoridad Garante del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República ordenó la reanudación de los asuntos que fueron entregados de forma física y/o electrónica por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el objeto de que se emitieran los acuerdos correspondientes, atendiendo al estado procesal en el que se encontraran las actuaciones de los expedientes. Asimismo, se instruyó a que, una vez desahogados los trámites legales conducentes, se continuara con la debida sustanciación de los procedimientos.

h) Ampliación de plazo. El dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, el Titular de esta Autoridad Garante del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República emitió el acuerdo por medio del cual se amplía el término legal para resolver el recurso de revisión en el que se actúa.

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y no existiendo diligencia pendiente de desahogo, se emite la resolución que conforme a derecho procede, de acuerdo con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia. Esta Autoridad Garante es competente para conocer y resolver el presente expediente con fundamento en el artículo 6°, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracción V, 8, 10, 13, 34, 35, fracciones I, II y XIX, 36, 144, 145, 146, 147, 148, 153 y Décimo Octavo transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción XX y 206 del



Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República; así como del ACUERDO A/OIC/002/2025 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de abril de dos mil veinticinco,

SEGUNDO. Estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento. De las constancias que forman parte de este recurso, se advierte que previo al estudio del fondo es necesario efectuar el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para determinar lo que en Derecho proceda, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente.¹

I. Improcedencia. El artículo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece como causales de improcedencia las siguientes:

"Artículo 158. El recurso será desechado por improcedente cuando:

- I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 144 de la presente Ley;*
- II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por la recurrente;*
- III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 145 de la presente Ley;*
- IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 147 de la presente Ley;*
- V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;*
- VI. Se trate de una consulta, o*
- VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos."*

Derivado de lo anterior, se procederá a realizar un análisis individual de las fracciones contenidas en dicho precepto:

- **Fracción I.** De las constancias que obran en el expediente, se tiene que el presente recurso de revisión fue presentado en tiempo y forma, toda vez que el sujeto obligado hizo de conocimiento la respuesta el seis de marzo de dos mil veinticinco y la persona recurrente impugnó la misma el veintiuno de mismo mes y año, por lo que se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 144 de la Ley General de la materia, es decir, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la respuesta a la persona solicitante.

¹ Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: **"Improcedencia.** Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías."



- **Fracción II.** De las actuaciones y constancias que obran en el expediente a la vista de esta Autoridad Garante, no se advierte que la parte recurrente haya promovido algún medio de defensa ante órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación en contra del mismo acto impugnado mediante el presente recurso.
- **Fracción III.** En el artículo 145 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establecen los supuestos de procedencia del recurso de revisión, cuyo contenido se transcribe a continuación:

***"Artículo 145.** El recurso de revisión procede en contra de:*

- I. La clasificación de la información;*
- II. La declaración de inexistencia de información;*
- III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;*
- IV. La entrega de información incompleta;*
- V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;*
- VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley;*
- VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado;*
- VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para la persona solicitante;*
- IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;*
- X. La falta de trámite a una solicitud;*
- XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;*
- XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o*
- XIII. La orientación a un trámite específico.*

La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución al recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI de este artículo, es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante la Autoridad garante correspondiente."

En ese sentido, del extracto normativo anterior, así como de las manifestaciones que obran en autos, se advierte de forma preliminar que, en el caso concreto se actualizan las fracciones I y IV del artículo 145 del precepto legal en cita, es decir, la clasificación de la información y la entrega de información incompleta, presunción que será materia de un análisis detallado en líneas posteriores,

- **Fracción IV.** En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 147 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



- **Fracción V.** De las manifestaciones realizadas por la parte recurrente, no se desprende que se haya impugnado la veracidad de la información proporcionada por el sujeto obligado.
- **Fracción VI.** De la revisión al recurso de revisión interpuesto, no se advirtió que la pretensión del particular versara en una consulta.
- **Fracción VII.** Del contraste de las constancias de la solicitud de información y del recurso de revisión interpuesto, no se advierte que se hubiesen ampliado los términos de la solicitud original.

Del análisis realizado por esta Autoridad Garante, se advierte que no se actualiza alguna causal de improcedencia.

II. Sobreseimiento. Al respecto, el artículo 159 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prevé lo siguiente:

"Artículo 159. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:

- I. El recurrente se desista;*
- II. El recurrente fallezca o tratándose de personas morales que se disuelvan;*
- III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia, o*
- IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del presente Capítulo."*

En relación con este punto y del estudio oficioso realizado por esta Autoridad Garante, de las constancias que integran el expediente en el que se actúa, se advierte lo siguiente:

- **Fracción I.** No obra constancia que acredite el desistimiento de la persona recurrente respecto del presente medio de impugnación, por lo que el supuesto previsto en la fracción I del artículo 159 no se actualiza.
- **Fracción II.** No se encuentra elemento alguno que permita tener por acreditado el fallecimiento de la persona recurrente, ni la disolución de persona moral alguna, por lo que el supuesto previsto en la fracción II del artículo 159 resulta inaplicable.



- **Fracción IV.** Tampoco se desprende la existencia de causal de improcedencia superviniente que genere el sobreseimiento del recurso, razón por la cual el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 159 no se actualiza.

Ahora bien, por cuanto hace a la **fracción III** no pasa inadvertido para esta Autoridad Garante que el sujeto obligado remitió un alcance de respuesta que podría actualizar la referida fracción, por lo que dicha situación será materia de análisis en líneas precedentes.

TERCERO. Resumen de agravios. En el caso que nos ocupa, conviene recordar que una persona requirió a la Fiscalía General de la República diversa información relacionada con el "ANEXO Técnico de los Lineamientos L/001/2022 de operación del Banco Nacional de Datos Forenses".

Ahora bien, se tiene que, en respuesta el sujeto obligado, por conducto de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental, informó lo siguiente:

- Que con fundamento a lo dispuesto en el artículo 133 de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la solicitud de acceso a la información fue turnada para su atención a las unidades administrativas que pudieran ser competentes derivado de sus funciones y atribuciones.
- Que en relación con el requerimiento de información identificado con el numeral 1), inciso a), número de usuarios con los que cuenta el Banco; se informó que se localizaron un total de 109 altas de usuarios.
- Que, en relación al desglose de usuarios por institución se proporcionó una lista de las instituciones a las que pertenecen dichos usuarios.
- Que por cuanto hace al inciso b) niveles de acceso, se proporcionó la información correspondiente con los niveles de acceso.
- Que en relación con el segundo de sus requerimientos formulados, respecto de la dirección web que contiene la consulta pública estadística, se precisó que aún no se cuenta con registro de lo solicitado, toda vez que el funcionamiento de las soluciones tecnológicas del Banco Nacional de Datos Forenses, como lo es el caso de la "Consulta Pública", atiende a un proceso gradual.
- Que en relación al requerimiento 3), inciso a), se informó que los días 20 y 21 de julio se dio inicio a la impartición del curso de capacitación dirigido al personal encargado de realizar las consultas en el Banco Nacional de Datos Forenses, perteneciente al entonces Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información.



para el Combate a la Delincuencia, ahora Centro Federal de Inteligencia Criminal, contando con la participación de las personas asignadas a esa tarea en dicho Centro. Asimismo, en el mes de noviembre de 2024, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos solicitó el registro del curso de capacitación: "Conocimiento, Operación y Uso del Banco Nacional de Datos Forenses" a la Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos de la Fiscalía General de la República, con el fin de que, durante el año 2025, se inicie con su impartición a las personas designadas como usuarias de todo el país.

- Que en relación con el inciso b) del referido requerimiento, se informó la existencia de un video tutorial de capacitación sobre el Banco Nacional de Datos Forenses.
- Que respecto del inciso c), consistente en el video de la referida capacitación se precisó una imposibilidad jurídica para proporcionar lo solicitado, toda vez que actualiza los supuestos de clasificación de reserva previsto en el artículo 110 fracciones I, VII y XIII de la entonces vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los entonces vigentes numerales DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO SEXTO y TRIGESIMO SEGUNDO de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
- Que en relación al requerimiento 4), inciso a), se precisó que dichos formatos se estiman como documentación de libre llenado, dejando a criterio de cada enlace y candidato a usuario la posibilidad de su modificación de forma, tipografía y fundamentación aplicable a cada entidad federativa, incluso si se requiriera el uso de papel membretado, siempre y cuando se proporcionen los datos personales y/o técnicos que son solicitados por la Fiscalía.
- Que en relación con el requerimiento 5), inciso a), se informó que se identificó un Plan Individualizado de Integración al Banco Nacional de Datos Forenses para la interoperabilidad con el Registro Nacional de Detenciones.
- Que en relación al inciso b), del referido requerimiento, se informó que se identificó que el Plan Individualizado de Integración al Banco Nacional de Datos Forenses para la interoperabilidad con el Registro Nacional de Detenciones fue elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
- Que en relación con el inciso c), se puso a disposición el Plan Individualizado de Integración al Banco Nacional de Datos Forenses para la interoperabilidad con el Registro Nacional de Detenciones; sin embargo, se comunicó la existencia de un



impedimento material y jurídico para atender su petición en la modalidad señalada, toda vez que la modalidad en la que se encuentra dentro de los archivos institucionales es de manera física, por lo que, para su entrega, es necesaria la elaboración de una versión pública, ya que contiene datos que actualizan las fracciones I, V, VII y XIII de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puesto que las documentales contienen especificaciones técnicas relacionadas con el soporte para la operación del Registro Nacional de Detenciones, además de datos que permiten la identificación de las personas servidoras públicas que tienen conocimiento sobre dichas especificaciones derivado de su participación en la elaboración del documento en referencia, por lo que, se pusieron a disposición las documentales localizadas en consulta directa, o bien, si desea la reproducción de estas en copia simple o copia certificada, previo pago de derechos.

- Que en relación con el requerimiento 6), se informó que la versión pública del cronograma de implementación, se encuentra contenido en la versión pública del Plan Individualizado de Integración al Banco Nacional de Datos Forenses para la interoperabilidad con el Registro Nacional de Detenciones, que en el punto anterior se entregaría.
- Que en relación con el requerimiento 7), se proporcionó una lista con las Instituciones que han designado enlaces.
- Que en relación con el requerimiento 8), se informó que de la búsqueda realizada en los sistemas, archivos y/o bases de datos, se identificó un total de trece cargas masivas de información a los Registros Nacionales.
- Que en relación con el requerimiento 9), inciso a), se informó que a la fecha de interposición de la solicitud de acceso a la información se han diseñado 11 algoritmos.
- Que en relación con el inciso b) del referido requerimiento, se informó que a la fecha de interposición de la solicitud de acceso a la información se han implementado 11 algoritmos.
- Que en relación con el inciso c) del referido requerimiento, se precisó que no es procedente proporcionar la información requerida, en virtud de que actualiza el supuesto de información clasificada como reservada de conformidad con lo previsto por el artículo 110, fracciones I y VII de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud de que se podría



comprometer la seguridad pública de la Federación y obstaculizar la prevención o persecución de los delitos.

- Que en relación con el requerimiento 10), inciso a), se informó que se identificaron un total de 2,152 acciones de búsqueda relacionadas con consultas al Banco Nacional de Datos Forenses.
- Que en relación con el requerimiento 11), inciso a), se informó que a la fecha de presentación de la solicitud de acceso a la información se encuentran diez recursos de información interconectados al Sistema de Búsqueda del Banco Nacional de Datos Forenses, proporcionando una lista de los referidos.
- Que en relación con el requerimiento 12), se informó que no se cuenta con registros de lo solicitado, puesto que las consultas al buscador del Banco Nacional de Datos Forenses no constituyen una identificación en sí mismas, pues no es ésta la función del Banco, únicamente arroja resultados sobre datos coincidentes entre los registros de las distintas bases que lo componen sin que se cuente con la obligación de realizar un documento *ad hoc* para la atención a dicho requerimiento.

Posteriormente, la persona solicitante interpuso recurso de revisión mediante el cual manifestó su inconformidad con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, señalando:

- Que la respuesta formulada por el sujeto obligado no le fue notificada a través del correo electrónico que proporcionó para oír y recibir notificaciones.
- Que en el numeral 1 solicitó el **número de usuarios**, y en el inciso a) especificó que debía desglosarse **por institución** de adscripción, mientras que la FGR informó de 109 usuarios y enlista 22 instituciones de adscripción, pero no informa cuántos usuarios corresponden a cada institución.
- Que en el numeral 3 requirió información relacionada con cursos de capacitación, incluido **a cuántas personas y de qué instituciones** se había capacitado, mientras que la FGR le informó que "*se dio inicio a la impartición del curso...*", pero no se le informó del número de personas, ni se hizo pronunciamiento al respecto.
- Que solicitó los **videos** de los cursos de capacitación, mientras que la FGR informó sobre la existencia de un video, pero lo reserva.
- Que en respuesta al numeral 9, el sujeto obligado reservó los **algoritmos** implementados.



CUARTO. Litis. Como se observa de la lectura íntegra a los agravios de la persona recurrente, y tomando en consideración las actuaciones de las partes, en estricta aplicación de la suplencia de la queja a favor de la persona recurrente, prevista en el artículo 148 de la Ley General en la materia, esta Autoridad Garante advierte que las manifestaciones vertidas tienden a controvertir la clasificación de la información y la entrega de información incompleta, por lo que se actualizan las causales previstas en las fracciones I y IV del artículo 145 de la propia Ley.

QUINTO. Estudio de fondo. En relación a lo anterior, y con la intención de dilucidar la *litis* del presente asunto, se tiene que, al rendir sus alegatos, el sujeto obligado manifestó lo siguiente:

- Que la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental de la Fiscalía General de la República cumplió cabalmente con los tiempos y formas previstos en la entonces vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, los entonces vigentes Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública, puesto que la petición se turnó para su atención a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, a la Agencia de Investigación Criminal y a la Oficialía Mayor, toda vez que de las atribuciones que les confiere la Ley de la Fiscalía General de la República, el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República y demás normatividad aplicable, podría contar con la información solicitada.
- Que derivado de los agravios formulados por el ahora recurrente, se da atención puntualmente a cada uno de ellos, en los siguientes términos:
 - ✦ Por cuanto hace al agravio consistente en que el sujeto obligado no informó cuántos son los usuarios del Banco Nacional de Datos Forenses, sin precisar cuántos usuarios corresponden a cada institución, se proporcionó una lista desglosa en la cual se identificó a qué instituciones se encuentran adscritas las altas de los usuarios del referido Banco.
 - ✦ Por cuanto hace al agravio consistente en que el sujeto obligado al momento de emitir su respuesta no precisó el número de personas que se han capacitado, se informó el número de personas, así como la unidad de adscripción que han sido capacitadas en temas relacionados con el Banco Nacional de Datos Forenses.



- ↓ Por cuanto hace a la solicitud del video de capacitación, el sujeto obligado tuvo a bien reiterar la respuesta inicial; es decir, la clasificación de la información por actualizar una causal de reserva.
- ↓ Por cuando hace a la solicitud de algoritmos implementados, de igual manera, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial, consistente en la clasificación de la información por actualizar una causal de reserva.
- Que las precisiones antes referidas fueron hechas del conocimiento del particular a través de oficio en alcance de respuesta FGR/UETAG/003602/2025 de fecha siete de agosto de dos mil veinticinco, mismo que le fue notificado mediante el correo electrónico señalada para tales efectos.

Asimismo, cabe precisar que esta Autoridad Garante guarda constancia del alcance enviado a la persona recurrente, mediante el correo electrónico señalado para recibir notificaciones, a través del cual el sujeto obligado hizo de su conocimiento el contenido de la respuesta complementaria.

Establecido lo anterior, corresponde a esta Autoridad Garante verificar si el sujeto obligado observó las disposiciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo los principios de máxima publicidad e interpretación pro persona.

Al respecto, es necesario referir que en los artículos 1 y 6°, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el derecho de acceso a la información es un derecho humano reconocido en ésta, del que gozarán todas las personas en el territorio nacional, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse.

En ese sentido, al tratarse de un derecho humano reconocido en la Constitución Federal, las normas que rigen el derecho de acceso a la información se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Asimismo, de los preceptos constitucionales referidos, se observa que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. Por ello, en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.



Expuesto el marco normativo anterior, de una interpretación armónica a las disposiciones constitucionales señaladas, se tiene que el ejercicio del derecho de acceso a la información cuenta con las siguientes características:

- En la interpretación del derecho de acceso a la información deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la Ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.
- Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados.

Por ello, en la aplicación e interpretación de la Ley en la materia deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, las disposiciones que regulan aspectos de transparencia y acceso a la información previstas en la legislación federal en su conjunto deberán interpretarse armónicamente atendiendo al principio pro persona.

En ese sentido, en primer lugar, resulta necesario precisar que la materia de análisis del presente recurso de revisión únicamente se enfocará en aquellos puntos controvertidos por la persona recurrente mediante la interposición de su recurso de revisión; lo anterior toda vez que, en relación con los que no fueron controvertidos, se entiende que no existe inconformidad con las respuestas que le fueron proporcionadas, por lo que serán considerados actos consentidos, sirviendo de sustento lo establecido en la siguiente Tesis con número de registro 176608:

"ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 2/90. Germán Miguel Núñez Rivera. 13 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón.



Amparo en revisión 393/90. Amparo Naylor Hernández y otros. 6 de diciembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: María Dolores Olarte Ruvalcaba.

Amparo directo 352/2000. Omar González Morales. 10. de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: Julieta Esther Fernández Gaona.

Amparo directo 366/2005. Virginia Quixihuitl Burgos y otra. 14 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretario: Horacio Óscar Rosete Mentado.

Amparo en revisión 353/2005. Francisco Torres Coronel y otro. 4 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretaria: Carla Isselin Talavera."

Además de lo anterior, en aras de robustecer lo expuesto, se trae a colación el Criterio SO/001/2020 emitido por el otrora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que se invoca por analogía:

"Actos consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis. Si en su recurso de revisión, la persona recurrente no expresó inconformidad alguna con ciertas partes de la respuesta otorgada, se entienden tácitamente consentidas, por ende, no deben formar parte del estudio de fondo de la resolución que emite el Instituto."

En relatadas circunstancias, se advierte que esta Autoridad Garante emitirá la presente resolución tomando en consideración únicamente las respuestas controvertidas por la persona recurrente de las cual adujo un agravio, no así, de aquellas respuestas de las cuales no manifestó alguna inconformidad o afectación, ya que de conformidad con lo antes señalado se advierte que son considerados actos consentidos tácitamente.

De esta manera, conviene recordar que la persona recurrente al momento de esgrimir sus agravios, manifestó:

"En el numeral 1 solicité el número de usuarios, y en el inciso a) especifiqué que debía desglosarse por institución de adscripción. La FGR informa de 109 usuarios y enlista 22 instituciones de adscripción, pero no informa cuántos usuarios corresponden a cada institución."

En el numeral 3 indagué por cursos de capacitación, incluido a cuántas personas y de qué instituciones se había capacitado. La FGR me informa que "se dio inicio a la impartición del curso...", pero se me informa el número de personas, ni se hace pronunciamiento al respecto." (Sic)



En ese sentido, por cuando hace al **primero** de los agravios formulados por la persona recurrente, relativo al numeral 1 de la solicitud, el sujeto obligado mediante su oficio de alcance de respuesta FGR/UETAG/003602/2025 de fecha siete de agosto de dos mil veinticinco, informó al particular.

"Después de realizar una búsqueda puntual de la información solicitada se identificó que las instituciones a las que se encuentran adscritas las altas de los usuarios del Banco Nacional de Datos forenses corresponden a las siguientes:

- *Fiscalía General de la República/ 24 usuarios*
- *Fiscalía General Justicia del Estado de Tabasco/ 3 usuarios*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de México/ 3 usuarios*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas / 1 usuario*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes/ 4 usuarios*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche/ 5 usuarios*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa/ 5 usuarios*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán/ 3 usuarios*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas/5 usuarios*
- *Fiscalía General del Estado de Durango/ 2 usuarios*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla/ 5 usuarios*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León/ 4 usuarios*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Colima/ 1 usuario*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora/ 6 usuarios*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco/ 5 usuarios*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas/ 5 usuarios*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California/ 5 usuarios*
- *Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo / 5 usuarios*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz/ 5 usuarios*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila / 4 usuarios*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro/ 5 usuarios*
- *Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo/ 4 usuarios" (Sic)*

Con lo anterior, se advierte que el sujeto obligado subsanó la omisión que en su respuesta inicial había causado agravio a la persona recurrente, pues si bien, en un inicio no precisó cuántos usuarios pertenecían a cada una de las instituciones señaladas, en su alcance tuvo a bien realizar el desglose solicitado por el recurrente.

Ahora bien, en relación con el **segundo** de los agravios manifestado por la persona recurrente, correspondiente al numeral 3 de su requerimiento, relacionado con la falta de pronunciamiento por parte del sujeto obligado sobre número de personas que han sido capacitadas para el uso del Banco Nacional de Datos Forenses, se advierte que se otorgó la respuesta siguiente:



*"...se informa que en julio de 2023 se dio inició a la impartición del curso de capacitación dirigido inicialmente a **14 personas**, mismas que eran encargadas de realizar las consultas en el Banco Nacional de Datos Forenses, perteneciente al entonces Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), ahora Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC), contando con la participación de las personas asignadas a esa tarea dentro del mencionado Centro.*

*Posteriormente, durante el año 2024 se celebraron dos jornadas de capacitación a **209 personas** servidoras públicas de distintas fiscalías especializadas del país; esta actividad se realizó en la modalidad de "formador de formadores", es decir, se impartieron los conocimientos del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) a personal enlace designado por las Procuradurías y Fiscalías de Justicia en el país, las que habrían de replicar dichos conocimientos con el personal de su respectiva instancia.*

*En el presente año 2025, se han capacitado a **29 personas**." (Sic)*

De lo anterior se advierte que el sujeto obligado tuvo a bien subsanar la omisión al precisar de forma concreta el número de personas que han sido capacitadas en temas relacionados con el Banco Nacional de Datos Forenses.

Hasta este punto, resulta dable mencionar que para la actualización de la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 154 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deben concurrir dos elementos: que el sujeto obligado modifique o revoque el acto impugnado y que, como consecuencia de ello, el recurso de revisión quede sin materia; situación que aconteció en el presente asunto, por cuanto hace los **agravios** relativos a los **numerales 1 y 3 de la solicitud** de información, toda vez que el sujeto obligado, al emitir su respuesta en alcance, proporcionó la información requerida; bajo ese entendido, esta Autoridad Garante determina procedente **sobreseer** el presente recurso por cuanto hace a los agravios señalados.

Ahora bien, respecto del **tercero** de los agravios, consistente en: *"...También solicité los **videos de capacitación**, la FGR informa que hay uno, pero lo **reserva**." (Sic); visto que el sujeto obligado tuvo a bien clasificar dicha información considerando que el supuesto actualiza una causal de reserva, se procederá al análisis de la referida clasificación.*

Bajo las referidas circunstancias es importante considerar que el sujeto obligado, al momento de emitir su respuesta correspondiente, fundamentó su clasificación de la información en normatividad que en el momento de su emisión se encontraba vigente, como lo son: la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información



así como para la elaboración de versiones públicas, razón por la que esta Autoridad Garante procederá al análisis desde la normatividad vigente al momento de la emisión de la presente resolución pero que se encuentra en el mismo sentido de la invocada por el sujeto obligado en las legislaciones abrogadas.

Así, esta Autoridad Garante considera que la información a la cual intenta acceder la persona recurrente describe los procesos a través de los cuales es posible acceder al Banco Nacional de Datos Forenses, los requerimientos de acceso, el tipo de información que es posible ingresar y extraer considerando la información contenida en los Registros y Sistemas que éste interconecta.

En ese sentido, es importante traer a colación lo previsto en las fracciones I, VII y XII del artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

"Artículo 112. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

- I.** *Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional o la paz social;*
- (...)
- VII.** *Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de una persona denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;*
- (...)
- XVII.** *Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales."*

Además de lo establecido en los artículos 119 y 120 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el numeral DÉCIMO PRIMERO de los LINEAMIENTOS L/001/2022 para la implementación y operación del Banco Nacional de Datos Forenses; del Registro Forense Federal; del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas; del Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas; y de la Base Nacional de Información Genética, los cuales en lo medular establecen:

"Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.



Artículo 119. El Banco Nacional de Datos Forenses está a cargo de la Fiscalía y que tiene por objeto concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas, así como para la investigación de los delitos materia de esta Ley.

El Banco Nacional de Datos Forenses debe estar interconectado con las herramientas de búsqueda e identificación previstas en esta Ley que conforman el Sistema Nacional y ser actualizado en tiempo real, mediante personal designado y capacitado para ello. La información deberá ser recabada de conformidad con los protocolos correspondientes."

Artículo 120. Corresponde a la Fiscalía coordinar la operación y centralizar la información del Banco Nacional de Datos Forenses, así como administrar el Registro Forense Federal, en términos de lo que establezca el Reglamento. (...) "

"Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo 110.- (...) "

La información contenida en las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.

Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, (...) "

"DÉCIMO PRIMERO. La información contenida en el Banco Nacional de Datos Forenses, así como la información y datos de todos los registros, bases y sistemas a que se refieren los presentes Lineamientos, se regirá conforme a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como de protección de datos personales, de conformidad con los artículos 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 97 de la Ley de la Fiscalía General de la República, y 116 y 127 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas."

Así como de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 218, el cual a letra señala:

"Artículo 218. Reserva de los actos de investigación

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.



La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme."

En ese sentido, tal y como lo advirtió el sujeto obligado, debe tomarse en consideración que la referida interconexión forma parte del Sistema Nacional de Información, así como los Registros Nacionales, cuyos fines son salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado.

Razón por la que, de ser revelados se pondría en riesgo la preservación de la seguridad pública, además de que, al relacionarse con información sobre la operación de dicho sistema, en específico sobre cómo efectuar la consulta de datos vertidos en carpetas de investigación tramitadas ante el Ministerio Público, se vulnerarían las líneas de investigación y se pondría en riesgo la persecución de los delitos.

Además de lo anterior, no pasa inadvertido para esta Autoridad Garante que el sujeto obligado realizó las correspondientes pruebas de daño relacionadas con las fracciones I, VII y XII del artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; al respecto, se tiene que la clasificación aludida fue aprobada por su Comité de Transparencia mediante el acta emitida en la Octava Sesión Ordinaria 2025, lo cual fue verificado por este Autoridad Garante.



Por lo antes vertido, se advierte que la información requerida por la persona recurrente actualiza las causales de reserva previstas en las fracciones I, VII y XII del artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que esta Autoridad Garante encuentra debidamente fundada y motivada la referida clasificación.

Por cuando hace al **cuarto** de los agravios, consistente en: *"También, en respuesta al numeral 9, reserva los algoritmos implementados."* (Sic), es de resaltar que el sujeto obligado, de igual manera, reiteró la respuesta inicial otorgada a la persona recurrente.

En ese sentido, considerando que la persona recurrente solicitó conocer los algoritmos diseñados e implementados para la operación del Banco Nacional de Datos Forenses y visto que el sujeto obligado tuvo a bien clasificar dicha información considerando que el supuesto actualiza una causal de reserva, esta Autoridad Garante procederá al análisis de la referida clasificación.

Así, esta Autoridad Garante considera necesario ponderar que difundir la información referente a los algoritmos del Banco Nacional de Datos Forenses revelaría datos concernientes a la capacidad de respuesta tecnológica e informática de esta institución, que es utilizada por el personal de la Fiscalía para la investigación y persecución de los delitos que hacen efectiva la seguridad pública.

En ese sentido, es importante considerar que la solicitud formulada por el ahora recurrente, para el sujeto obligado actualizó lo previsto en las fracciones I y VII del artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de las cuales se omite nuevamente su transcripción en obviedad de innecesarias repeticiones.

En ese contexto, por lo que hace a la primera de las fracciones en comento, es importante destacar que la competencia de la Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas se encuentra establecida en los artículos 5, fracción XII, inciso e) y 192 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República que establece que entre sus facultades se encuentra la de coordinar que se provean los servicios de telefonía, comunicaciones, informática, internet, centro de datos e infraestructura tecnológica de la institución a las unidades administrativas, para el eficiente y eficaz desarrollo de sus funciones sustantivas.

Por su naturaleza, el Banco Nacional de Datos Forenses interconecta las siguientes fuentes de información heterogéneas:



- Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas (RENAPEFA);
- Sistema Estratégico de Seguimiento sobre expresiones Delictivas (SINIED);
- Sistema Nacional de Información Nominal (SININ);
- Base de Datos Ante Mortem y Post Mortem;
- Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET);
- Alerta Amber;
- Registro Forense Federal (REFOFE);
- Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas (RENAFO);
- Base Nacional de Información Genética (BaNIG); y
- Registro Nacional de Detenciones (RND).

Cada una de las unidades tecnológicas responsables de la administración de la fuente de información ha desarrollado algoritmos a partir de los criterios o parámetros aportados por los usuarios y de las particularidades tanto tecnológicas como de disponibilidad de variables en sus registros.

La herramienta de búsqueda del Banco Nacional de Datos Forenses consta de una interfaz a la que los usuarios ingresan parámetros o criterios que se encuentran agrupados en:

- Nominales;
- Características individualizantes; y
- Elementos biométricos.

De acuerdo con las capacidades tecnológicas (infraestructura y arquitectura tecnológica) y de información de la fuente (variables aprovechables con las que se cuenta para llevar a cabo la búsqueda de registros coincidentes) se diseñan e implementan los algoritmos idóneos de acuerdo con las condiciones particulares.

Los algoritmos guían la forma en que se procesa y gestiona la información, un algoritmo es un conjunto de instrucciones sistemáticas y previamente definidas que se utilizan para realizar una determinada tarea, es por ello que, la divulgación de detalles sobre la implementación de algoritmos de búsqueda de personas del Banco Nacional de Datos Forenses puede revelar características e incluso vulnerabilidades en la seguridad de los sistemas, lo que podría ser aprovechado por atacantes malintencionados para acceder a información confidencial, dañar los sistemas o interrumpir los servicios.

Entre los detalles técnicos intrínsecos de la implementación se encuentran:



- Tecnologías empleadas en la implementación como lenguajes de programación, manejadores de bases de datos, patrones o plantillas de programación (frameworks) nombres de entidades del modelo de datos de la fuente y heurísticas;
- Metadatos o atributos clave para la búsqueda y localización de personas; y
- Las fortalezas y debilidades de los algoritmos.

Al respecto, resulta importante considerar que difundir los detalles técnicos de los algoritmos implementados, ante el auge tecnológico al alcance de cualquier ciudadano, o bien, de integrantes de la delincuencia organizada, esa experticia y conocimiento podría potencialmente convertirse en un riesgo, representando una amenaza a la seguridad pública, pues ante tal escenario se verían afectadas investigaciones de las personas agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.

Bajo tales circunstancias, se advierte que difundir cualquier dato o información relacionada con los algoritmos del Banco Nacional de Datos Forenses, revelaría datos concernientes a la capacidad de repuesta tecnológica e informática e implicaría revelar el estado de fuerza de la Institución, ya sea en el sentido de la infraestructura tecnológica con la que cuenta o de la que carece, lo que causaría un grave perjuicio a las actividades de investigación y persecución de los delitos propios de este órgano autónomo, lo que constituye un riesgo real y una amenaza a la seguridad pública.

Además de lo anterior, no pasa inadvertido para esta Autoridad Garante que el sujeto obligado realizó las correspondientes pruebas de daño relacionadas con las fracciones I y VI del artículo 112 de la ahora Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; al respecto, la referida clasificación fue aprobada por su Comité de Transparencia mediante el acta de la Octava Sesión Ordinaria 2025, lo cual fue verificado por esta Autoridad Garante.

Por lo antes vertido, se advierte que los algoritmos solicitados por la persona recurrente actualizan las causales de reserva previstas en las fracciones I y VII del artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que esta Autoridad Garante encuentra debidamente fundada y motivada la referida clasificación.

En ese sentido, y toda vez que resultó válida la clasificación de los videos y algoritmos solicitados por la parte recurrente, es que esta Autoridad Garante determina procedente **confirmar** la respuesta otorgada por el sujeto obligado en cuanto a dicha clasificación.

Por lo expuesto y fundado, esta Autoridad Garante:



RESUELVE

PRIMERO. SOBRESEER y CONFIRMAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos expuestos en la presente resolución, y conforme a lo establecido en el artículo 154, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la persona recurrente que, en caso de encontrarse inconforme con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla mediante juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 161 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

TERCERO. Con fundamento en el artículo 156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio señalado para tales efectos.

Así lo resolvió y firma el **Lcdo. Miguel Ángel Cerón Cruz**, en su carácter de Titular de la Unidad de Vigilancia y Cumplimiento en Materia de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.